

**Colección
mínima**

**LA CRISIS
ARGENTINA
Una mirada
al siglo XX**

por
Luis Alberto Romero





Siglo veintiuno editores Argentina s. a.

LAVALLE 1634 11 A (C1048AAN), BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA

Siglo veintiuno editores, s.a. de c.v.

CERRO DEL AGUA 248, DELEGACIÓN COYOACÁN, 04310, MÉXICO, D. F.

982 Romero, Luis Alberto

ROM La crisis argentina: una mirada al siglo XX - 1ª. ed.-

Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2003.

128 p. ; 17x11 cm

ISBN 987-1105-50-9

I. Título. - 1. Historia Argentina

Portada de Daniel Chaskielberg

1ª edición argentina: 3.000 ejemplares

© 2003, Luis Alberto Romero

© 2003, Siglo XXI Editores Argentina S. A.

ISBN 987-1105-50-9

Impreso en Grafignor S.A.

Lamadrid 1576, Villa Ballester,

en el mes de septiembre de 2003

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Impreso en la Argentina - Made in Argentina

Índice

Advertencia	9
Introducción	11
1. La Argentina vital y conflictiva	19
Un estado potente	19
Una economía próspera	23
Una sociedad móvil y democrática	27
Ilusiones democráticas	32
Debilidad republicana, avance militar	39
El conflicto social, las corporaciones y el estado	47
2. Clímax y anticlímax	59
La oleada revolucionaria	60
La vuelta de Perón	71
La dictadura militar: lo nuevo y lo viejo	77
3. La Argentina decadente	85
El paraíso neoliberal en versión argentina	85
La nueva Argentina	89
La paradójica democracia	96

4. La crisis: final y apertura	107
El pozo de la crisis	107
Perspectivas interesantes	112
Bibliografía	123

Advertencia

Versiones preliminares de este texto fueron presentadas durante 2002 en el Seminario “Brasil-Argentina. A Visão do Outro: a Cultura Política”, organizado en Brasilia por el Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais y Fundação Centro de Estudos Brasileiros; en el Seminario del Institute of Latin American Studies de la Universidad de Londres y en reuniones con alumnos y docentes de las carreras de Ciencia Política de las Universidades Nacionales de Cuyo y de Rosario.

Redacciones parciales fueron publicadas como: “Le radici storiche del crollo argentino”, *Contemporanea. Rivista di storia dell’800 e del ’900*, Bologna, junio 2003; “Apogeo y crisis de la Argentina vital”, *Revista de las Américas. Historia y presente*, n° 1, Valencia, primavera de 2003; “La crisis argentina”, *Revista de Historia y Ciencias Sociales*, Santiago de Chile, 2003; próximamente aparecerán otras versiones, entre ellas: “Vieja y nueva Argentina”, en *Brasil - Ar-*

gentina. A Visão do Outro. Soberania e Cultura Política, IPRI, Brasília.

Durante 2002 escuché interesantes intervenciones sobre la crisis argentina en el Club de Cultura Socialista y en las reuniones “Agenda para la República”, organizadas por la revista *Criterio*, que me han servido para elaborar estas reflexiones. Agradezco también los comentarios y sugerencias de Ana Barletta, Boris Fausto, Carolina González Velasco, Mónica Hirst, Philip Kitzberger, Roberto N. Lobos, Federico Lorenz, Ignacio Lewkowicz, Anne Perotin-Dumon, Juan Carlos Torre y Loris Zanatta. Sobre todo, la rigurosa lectura de este texto hecha por Ana Leonor Romero.

Introducción

Durante 2002 los argentinos contemplamos el fondo de la crisis. Nos miramos a nosotros y a nuestras conductas casi sin velos, cuestionándolo todo: los políticos, la economía, las conductas cotidianas, las bases mismas del contrato social. La penetración de esa mirada sólo se compara con la de 1989, el año de la hiperinflación, los saqueos y el abrupto final de la Presidencia de Alfonsín; el momento en el que Tulio Halperin Donghi creyó ver el fin de la Argentina peronista. Pero lo de 1989 fue breve: una mirada rápida, pronto distraída por la promesa de una salida que, detrás de una penuria inicial, conduciría a la tranquilidad, a la seguridad, al *primer mundo*. Quizá con la experiencia de 2002 pase finalmente lo mismo; pero lo cierto es que durante un año no tuvimos más remedio que enfrentarnos con nuestra realidad.

Lo hicimos de una manera que se está volviendo habitual. Natalio Botana ha caracterizado este ciclo recurrente en el estado de ánimo

colectivo: la ilusión, cuando todo parece posible; el descreimiento, acompañado de resignación, cuando advertimos la resistencia de los datos duros de la realidad; finalmente la ira, intensa y fugaz, cuando la realidad nos golpea; Botana concluye: esta hora final es la de los jacobinos, de derecha e izquierda, que suman a la impugnación global la demanda de regeneración total.

Los días memorables de diciembre de 2001 iniciaron la hora de los iracundos. *Caceroleros, ahorristas, asambleístas y piqueteros* fueron la expresión de distintos segmentos de la sociedad, clamando en la calle por sus intereses afectados: el empleo perdido, los ahorros evaporados, la confianza defraudada; superpuestos pero no unidos, conformaron un coro de protesta generalizado, cuya voluntad crítica y capacidad analítica se resumió en la consigna dominante: *que se vayan todos*. Sobre ese estado de ánimo iracundo, un conjunto de políticos e intelectuales —es decir, los responsables de interpretar los problemas y proponer las soluciones— eligió la actitud apocalíptica: el sistema político estaba podrido hasta en sus raíces más profundas y la sociedad —que se conservaba pura e incontaminada— debía reconstruirlo desde sus bases, disolver las instituciones y recrearlas, regenerar instituciones y política.

Hubo otros que con la mirada más serena —*sine ira et studio*— procuraron examinar la crisis con más distancia, sacarla de su contexto inmediato —donde es posible atribuir culpas personales— y relacionarla con procesos más generales de la Argentina. A la vez que dudaban de las salidas mágicas, las regeneraciones totales, no dejaban de valorar lo que había de generoso y creativo en los movimientos de la sociedad que las sustentaban. Pero advertían que, de acuerdo con la experiencia, nada se construye *ex nihilo*; que probablemente la solución de la crisis habría de seguir un camino tortuoso; que habrían de utilizarse materiales humanos, sociales, institucionales, culturales y políticos deteriorados, impuros, pues ellos mismos eran parte de la crisis.

Este ensayo se ubica en esa perspectiva. No sé hasta cuándo durará la crisis actual ni cómo se saldrá de ella. En cambio, trataré de explicar desde cuándo estamos en crisis y de ordenar ideas acerca de causas cercanas y remotas que, si no son el anticipo de un final, que aún está abierto, quizá permitan entender el presente y aclarar las opciones para nuestras acciones.

El argumento que desarrollaré es simple. Hubo una Argentina vital, pujante, sanguínea y conflictiva, que se construyó a fines del siglo

XIX y aún era reconocible a fines de la década de 1960. Desde la década de 1980 vivimos en una Argentina decadente y exangüe, declinante en casi cualquier aspecto que se la considere, con una excepción paradójica: la construcción en medio de la decadencia de un régimen político y un sistema de convivencia democrático y plural, fruto tardío de la Argentina de la decadencia, quizá su canto del cisne. Entre ambos momentos, en la larga década de 1970, hubo una crisis en la que se condensaron los conflictos acumulados durante la etapa próspera y vital; un combate, con ganadores y perdedores. Su drástica liquidación definió el rumbo actual de la Argentina, aun cuando sus efectos se van revelando lentamente; son como bombas de efecto retardado que explotan —luego de que la guerra ha terminado— al paso de los confiadlos caminantes. En esos años, giró el destino de la Argentina, que pasó de ser un *país con futuro*, a ser *un país sin presente*.

Se trata de una versión muy estilizada —si se quiere, gruesamente simplificada— de un proceso histórico infinitamente más complejo. Observo más las tendencias, o las raíces lejanas de los problemas, antes que los ciclos y coyunturas, que serían más importantes para otro tipo de

análisis. La misma organización de los contenidos parecerá discutible para quien frecuente buenas obras de historia; en nuestro oficio se sabe que las rupturas solo se entienden en el contexto de las continuidades, y que éstas solo se explican bajo la forma de los cambios constantes. Se trata, pues, de un ensayo de reflexión, antes que de una cabal reconstrucción historiográfica.

Esa reflexión gira alrededor de tres problemas relacionados: el estado, la sociedad y la política, considerados en contextos económicos que de manera sucesiva fueron tendencialmente de expansión y de contracción. Sobre esos problemas básicos, que son la urdimbre del texto, la trama se organiza en torno de dos preguntas, ambas vinculadas con la cuestión de la democracia. La primera reside en la confrontación entre una sociedad igualitaria, móvil y democrática, y un régimen político democrático y republicano que plasmó mal por entonces y que en cambio se construye y arraiga tardíamente, en el contexto de una formidable desigualdad e inequidad social. La segunda se refiere a las posibilidades de la democracia —que en un sentido estricto alude a mecanismos de selección legítima de los gobernantes del estado— en momentos en que el estado está destruido, casi

pulverizado. ¿Será acaso que la dinámica social democrática y la potencia estatal conspiraban contra el arraigo de la democracia republicana? ¿Es que la polarización social y la licuación del estado hacen ahora finalmente aceptable la democracia republicana?

Para estas preguntas no se encontrarán en este ensayo respuestas categóricas: ellas solo son posibles a partir de una mirada conspirativa, bastante frecuente hoy entre los legos pero que es ajena a los historiadores. Me parece, en cambio, que ayudan a mirar situaciones paradójicas, que chocan con muchos de los relatos habituales del pasado argentino, que merecen ser reconsiderados. Soy consciente de que propondré una versión más: no hay un relato único de nuestro pasado; no puede ni debe haberlo. En el mío, se reconocerá una fuerte impronta generacional, pues viví intensamente tres experiencias: la movilización y violencia de los años 60 y 70; la represión del *Proceso*, es decir la última dictadura militar, y la construcción de la democracia en 1983. Puedo reconocer en mi modo de explicar el pasado el peso de estas tres experiencias, y percibir la radical diferencia de puntos de vista de quienes tienen en su haber dos de ellas, o una, o hasta ninguna.

Esta lectura del pasado no tiene en cada una de sus partes nada de estrictamente original. Salvo algunos puntos específicos, que estudié personalmente, me baso ampliamente en lo que escribieron mis colegas, como lo hice en mi *Breve historia contemporánea de la Argentina*. Afortunadamente, se trata de una producción excelente, compuesta de un conjunto de estudios clásicos y de una gran cantidad de libros, monografías e interpretaciones producidas a partir de la renovación universitaria de 1984. Tanta, que no podría dar cuenta de toda ella. Es obra de historiadores, y en buena medida también de los que me gustaría llamar historiadores por adopción, aunque suelen ser considerados como economistas, sociólogos o politólogos. Menciono en el texto las deudas más notables, y al final una pequeña selección de lo mucho y bueno que se ha escrito. Sobre mi aporte, diría que me he limitado a seleccionar, de entre lo que mis colegas hicieron, aquello que, de acuerdo con mi punto de vista, permite desarrollar la idea de este ensayo. Como se verá, tiene su final abierto: acaso todavía no hayamos terminado de recorrer el camino de la crisis; acaso ya hemos comenzado el largo camino de la reconstrucción.

1. La Argentina vital y conflictiva

Un estado potente

En muchos aspectos, la Argentina moderna fue creación de su estado, consolidado en 1880. La calificación de *liberal*, habitualmente aplicada a su etapa inicial, antes de la Primera Guerra Mundial, encubre lo que fue una activa participación estatal en la resolución de cuestiones cruciales. Luego del fin de las guerras civiles, en 1880, se completó el montaje institucional y se dio un fuerte impulso al crecimiento económico. Después de que el Ejército terminara de consolidar las fronteras, el estado realizó el traspaso de la tierra pública a manos privadas, a bajo costo y en grandes extensiones. Promovió las inversiones extranjeras, garantizando su rendimiento, y se endeudó para realizar obras públicas; impulsó la inmigración y emitió moneda de manera poco ortodoxa, a menudo en beneficio de inversores locales, que recibieron créditos generosos. Al estado se debe el excelente sistema educativo,

tanto en su rama básica como en la media, que tuvo una enorme incidencia en la manera como se conformaron la sociedad, la economía y la política. También preocupó a estos *liberales*, a menudo tachados de *cosmopolitas*, la nacionalización de los habitantes, muchos de ellos extranjeros por entonces. El sistema educativo y el Servicio Militar Obligatorio actuaron mancomunadamente para crear una base cultural e identitaria, consolidar la lealtad de la sociedad al estado y fortalecer su soberanía. Finalmente, en el estado se fue formando una burocracia especializada en el análisis de los problemas, y preparada para intervenir en su solución.

Tanto la Primera Guerra Mundial como la llegada al poder del radicalismo en 1916 tuvieron como consecuencia el desarrollo de nuevas funciones estatales. Los ensayos iniciales maduraron luego de la crisis económica de 1930, y desde entonces se establecieron las instituciones necesarias para la dirección de la economía: el Banco Central, las Juntas Reguladoras, el control de cambios, los sistemas arancelarios y un financiamiento del estado independiente de los ciclos del comercio exterior. También se introdujo un régimen de coparticipación federal de los recursos, que benefició a las provincias más

pobres. Luego de 1945, durante el gobierno de Perón, aumentó la intervención estatal. Se nacionalizó el crédito bancario y la mayoría de las empresas de servicios públicos. El estado asumió un papel muy activo redistribuyendo ingresos, del agro a la industria y de los empresarios a los trabajadores. También encaró la *justicia social*: bajo ese lema se conformó una variante local del llamado Estado de Bienestar. Finalmente, el estado actuó fuertemente en la regulación de la conflictividad social y en la aplicación de mecanismos para su concertación.

En 1955 cayó el peronismo. Pese al retorno de los *liberales*, el estado no renunció a ninguna de estas funciones de intervención. Continuaron vigentes los mecanismos de regulación del ciclo económico y de los conflictos laborales. Pero además los gobernantes iniciaron ambiciosos proyectos de transformación económica. Arturo Frondizi (1958-62) lanzó su propuesta *desarrollista*; poco después el general Onganía (1966-70) dio un fuerte impulso al sector empresarial más concentrado y *eficiente*, no se trataba solo de propuestas económicas: también se proyectaban a lo social y a lo político.

Se trataba, sin duda, de un estado que actuaba con energía y apostaba fuerte. Sin embargo,

ya acusaba signos de debilidad, que resultan significativos si se los mira en perspectiva. La hegemonía de los Estados Unidos en el subcontinente incorporó a la Argentina a la guerra fría, y los gobiernos fueron presionados para asumir el problema de la seguridad interior. Los problemas cíclicos de la economía se tradujeron en la presencia recurrente del Fondo Monetario Internacional, con la consiguiente reducción de la autonomía estatal. Un factor político al que se aludirá posteriormente —la proscripción del peronismo y los recurrentes golpes de estado— redujeron la legitimidad de los gobernantes. En el mismo sentido obró la interpenetración de intereses corporativos y públicos, que debilitó la unidad de acción del estado y fraccionó a su burocracia en segmentos relativamente independientes. El deterioro salarial, las secuelas del faccionalismo político y el clientelismo redujeron la calidad de la burocracia estatal. A fines de la década de 1960 comenzó una suerte de gran rebelión de la sociedad contra el estado. En 1973, cuando retornó al gobierno Juan Domingo Perón, su propuesta de reconstrucción de la autoridad estatal apareció como un objetivo atractivo y posible a la vez.

Una economía próspera

La Argentina supo tener una economía próspera, y distribuyó beneficios tales que permitieron la conformación de una sociedad móvil y de oportunidades. A lo largo de cien años, en el marco de los parámetros establecidos por el estado, y aprovechando adecuadamente las coyunturas internacionales, fue articulando sucesivos ciclos de crecimiento, separados uno de otro por crisis que en su momento parecieron graves pero que, en perspectiva, se superaron satisfactoriamente.

El primero de esos ciclos fue el más espectacular y permitió una amplia capitalización del país, especialmente en la infraestructura y los servicios. Se extendió entre las décadas finales del siglo XIX y el comienzo de la Primera Guerra Mundial y fueron sus soportes la producción y exportación de lana, carne y cereales. En esos años se combinaron, de manera óptima, las ventajas naturales de las praderas argentinas, la disponibilidad de excedentes demográficos europeos prestos a trasladarse y de capitales internacionales que buscaban oportunidades para invertir. Sobre todo, fue decisivo el fluido funcionamiento del mercado mundial y la ne-

cesidad de alimentos para las economías industriales en expansión. Sobre esas condiciones, el estado aportó lo suyo, que fue decisivo. La producción pampeana creció de manera espectacular; a diferencia de otros casos, como los enclaves mineros de Perú o Bolivia, sus beneficios se repartieron entre los inversores extranjeros, los productores e intermediarios locales, las economías urbanas y hasta las provincias no favorecidas. La industria --contra lo que afirma un viejo mito-- creció al compás de las exportaciones, con la elaboración de materias primas y con manufacturas sencillas para el mercado interno. Además, el país construyó sus puertos, sus servicios urbanos, edificios públicos monumentales, mansiones privadas y vastas urbanizaciones para los nuevos sectores medios. También se construyó una red ferroviaria que sobrevivió sin grandes transformaciones hasta que --signo de los tiempos-- desde 1991 comenzó a ser sistemáticamente levantada.

Este primer ciclo, de crecimiento fácil y notorio, llegó hasta 1914; entonces comenzaron las dificultades en el mercado exterior, que culminaron en 1929 con la Gran Crisis y el crack del comercio mundial, de las inversiones y de la inmigración. Ésos eran los elementos di-

námicos de la economía argentina en expansión, de modo que fue el fin del crecimiento fácil y el comienzo de una época más compleja. Hubo escasez de inversiones, necesidad de administrar las divisas, y un problema serio con el presupuesto estatal. A la vieja metrópolis, Gran Bretaña, se sumó los Estados Unidos, y mantener ambos vínculos fue complejo, en un mundo que abandonaba el patrón oro y se dividía en áreas comerciales cerradas. El aprendizaje fue difícil, como lo constató la primera administración del radical Hipólito Yrigoyen (1916-22), que no pudo resolver muchas de las dificultades.

Aunque dura, la crisis de 1929 se superó de manera relativamente rápida; a mediados de la década de 1930, el crecimiento de las industrias que sustituían importaciones permitió el comienzo de un nuevo ciclo expansivo, centrado en el mercado interno pero sustentado en última instancia en los beneficios del comercio exterior. La industria aprovechó la capacidad instalada, recibió nuevas inversiones, locales y extranjeras, y absorbió nutridos contingentes de trabajadores, que se trasladaron de las áreas rurales en crisis a la periferia de los centros urbanos. Gracias a la protección estatal y al soste-

nido aporte del sector agrario, que suministraba las divisas necesarias para pagar insumos y maquinarias, el crecimiento se sostuvo y el empleo industrial se expandió de modo notable. Beneficiados con ingresos de origen agrario, prosperaron a pasos parejos los industriales, los trabajadores y los consumidores en general, protagonistas de un nuevo crecimiento de los grandes conglomerados urbanos, y especialmente de sus cinturones suburbanos.

En 1952, una nueva crisis puso en evidencia las limitaciones de este tipo de crecimiento: por una parte, debilidad agraria y crónica escasez de divisas; por otra, ineficiencia de una industria excesivamente protegida y escasamente capitalizada. Por entonces hubo una reorientación en la política económica, que se completó y profundizó luego de 1958. Se apeló a las empresas de capital extranjero, a las que se concedió importantes ventajas --privilegios fiscales, mercados cautivos-- para el desarrollo de las ramas industriales complejas: petróleo y petroquímica, siderurgia, automotores. Desde entonces, y hasta mediados de la década de 1970, hubo un nuevo ciclo de crecimiento, tanto en la industria como en la producción agropecuaria, donde se recuperó el tiempo perdido desde 1914.

Para sus contemporáneos, lo más problemático de este crecimiento era la fuerte desigualdad, entre regiones y entre ramas de la economía, y la liquidación de una buena parte del sector industrial menos eficiente, que había prosperado en la etapa anterior. Todo ello solía considerarse una consecuencia inevitable del imperialismo y la dependencia. Pero a la larga, y visto desde otra perspectiva, los beneficios de ese crecimiento balancearon los aspectos negativos y alcanzaron a un sector significativo de las empresas nacionales, que maduraron y pudieron desenvolverse razonablemente bien dentro de los estándares establecidos por las empresas extranjeras. Es posible discutir sobre el momento en que la Argentina perdió la oportunidad de alcanzar a las economías más desarrolladas del mundo. Pero hacia 1973 los diagnósticos señalaban que, más allá de los importantes problemas, la economía argentina estaba fuerte y tenía alternativas.

Una sociedad móvil y democrática

Durante cien años, y de manera tendencial, los frutos de la prosperidad económica, apropiados ciertamente de manera desigual, se de-

ramaron sobre amplios sectores de la sociedad. La consecuencia más notable fue su capacidad para incorporar a sucesivos contingentes poblacionales a los beneficios de la vida moderna. En primer lugar, durante cincuenta años o más —los últimos grupos llegaron al fin de la Segunda Guerra Mundial— se incorporaron los inmigrantes europeos, sobre todo italianos y españoles. Desde 1930 fue el turno de la inmigración interna, atraída a las ciudades por la crisis agraria y el crecimiento industrial: primero vinieron de la *pampa gringa* y más tarde del interior tradicional, identificados como *cabecitas negras*. Desde la década de 1950 o 1960 se agregaron los migrantes de Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay, así como contingentes menores pero muy visibles del Lejano Oriente.

Incorporarse a la vida moderna significó, en primer lugar, tener trabajo. En términos generales, más allá de ciclos y crisis, hasta mediados de siglo todos pudieron emplearse. Luego de 1955 comenzaron los procesos de racionalización laboral; entonces, mantener la *f fuente de trabajo* fue el objetivo prioritario de las organizaciones sindicales. El trabajo abría distintos caminos para el ascenso y la integración. Uno consistió en acumular un pequeño ahorro y pa-

sar del trabajo dependiente a la condición de *cuenta propia*, en el comercio o en la pequeña manufactura, quizás asociada con un establecimiento industrial; esta vía funcionó bastante bien hasta mediados de siglo y luego se fue estrechando. Otro camino fue tener la *casa propia*, acaso en alguno de los nuevos suburbios de las grandes ciudades; su posesión era señal de que se había completado una etapa importante en la vida familiar. La vivienda, de material, era la base de un hogar establecido, una familia, modelo aceptado para la incorporación de los sectores en ascenso. También significaba participar en una empresa colectiva: la transformación por parte de los *vecinos* del espacio rural en urbanización, como ocurrió con los barrios de las ciudades en las décadas posteriores a 1920, o de manera algo distinta en los asentamientos de emergencia en los años 60.

La educación fue probablemente la vía del ascenso por excelencia. Gobiernos de todos los signos —la *oligarquía*, el radicalismo y el peronismo— coincidieron en la importancia de consolidar el sistema educativo público. La educación técnica facilitaba el progreso en el empleo industrial; los empleos estatales se ofrecían a quienes habían pasado los distintos ciclos educativos,

y la educación universitaria habilitaba para las profesiones liberales o la política. Por mucho tiempo, todo inmigrante llevó en su mochila el título de doctor, llave maestra de la incorporación. De la educación dependía también la seguridad de pertenecer a una comunidad, a una *nación*, compartiendo derechos y obligaciones. Sobre la base de los derechos civiles, asegurados inicialmente, se desarrollaron luego los restantes derechos sociales: salario justo, jubilación, salud, vacaciones y todo aquello que constituía el bienestar de la sociedad.

En la *aventura del ascenso* hubo fracasados, pero los exitosos fueron más, y sobre todo dejaron una huella más fuerte en el imaginario colectivo. Durante mucho tiempo las nuevas generaciones estuvieron en una situación mejor que las anteriores; por lo menos, aspiraron a estarlo, y construyeron su vida en función de esa aspiración. Esto conspiró contra la consolidación de identidades de clase sólidas y consistentes, y dificultó la expresión de los conflictos de intereses en términos polares. El concepto de *cultura de clase*, habitual en los estudios europeos, resulta poco adecuado para entender la sociedad argentina. Más adecuado es considerar este proceso en términos de una ideología espontánea,

no teorizada, surgida de la experiencia y asentada en el sentido común: la de la movilidad social. Como señaló José Luis Romero, la ideología de la *justicia social*, ampliamente implantada por el peronismo, no contradujo aquella sino que la confirmó. Puesto que cada individuo tenía derecho a mejorar su posición personal, el estado concurría a solucionar los problemas iniciales de los menos favorecidos, para que luego cada uno hiciera su experiencia.

En las décadas iniciales mantuvo vigencia un sector que no fue afectado por este proceso de movilidad e incorporación: la llamada *oligarquía* conservó su posición, por razones económicas, pero sobre todo de familia, educación, prestigio y consideración. Sin embargo, esta elite era en realidad mucho más abierta que lo que indicaba su propia imagen. Por último, la experiencia peronista terminó de diluir este fragmento de *Antiguo Régimen*. De ahí en más las elites surgieron principalmente sobre la base del mérito, incluyendo en este concepto la capacidad, éticamente cuestionable, para aprovechar en beneficio propio las oportunidades, franquicias o prebendas que, como se verá enseguida, creaba el estado en su relación con los grupos de interés.

Fue una sociedad en la que predominaban las gradaciones y faltaban los cortes tajantes, donde las diferencias no estaban consolidadas en términos de nacimiento, de tez o siquiera de apariencia. Fue una sociedad de masas de clases medias. Pero este término, que ha sido ampliamente utilizado en los análisis sociológicos, es poco útil si se considera a la *clase media* como un segmento fijo de la sociedad, con atributos deducibles de su posición intermedia. Es sugestivo en cambio si se lo considera desde la perspectiva de una sociedad dinámica, donde cada uno de sus miembros está de alguna manera en tránsito. En suma, aquélla fue una sociedad móvil, que generó un imaginario coincidente, de amplia aceptación.

Ilusiones democráticas

¿Cómo procesó sus conflictos esta sociedad próspera y democrática, guiada por un estado fuerte y activo? Como en cualquier sociedad capitalista contemporánea, éstos transcurrieron simultáneamente en dos escenarios, uno regido por el principio democrático de la soberanía popular, el bien común, la igualdad política y la

representación, y otro donde los intereses de la sociedad se organizaban, confrontaban y negociaban en los marcos creados por el estado. Una de las singularidades de la experiencia argentina reside en la debilidad del primero y el carácter fuertemente colusivo, normalmente corrupto, del segundo.

La democracia ilusionó, aunque luego su práctica defraudó. En 1912, la reforma política impulsada por el presidente Roque Sáenz Peña estableció que el sufragio, que ya era universal para los varones desde 1853, fuera además secreto y obligatorio; también se dispuso el uso del padrón militar y un sistema de representación de mayoría y minoría. La reforma pretendía corregir vicios y deficiencias largamente criticados. Uno de ellos era la baja participación electoral y la manipulación de los resultados electorales por el gobierno y sus agentes. Otro era el presidencialismo, ya establecido por la Constitución y acentuado por la práctica institucional, en la que el presidente era también el jefe del partido de gobierno. Por otra parte, este ejercicio de la autoridad coincidió con la amplia vigencia de las libertades civiles y con la existencia de un activo espacio público de debate.

En 1912 culminó un proceso de democratización de la vida política argentina. En él, la acción de las elites gobernantes, sus preocupaciones y estrategia fueron más importantes que las demandas de participación, por entonces acotadas a reducidos grupos cívicos: lo *concedido* pesó mucho más que lo *conseguido*. Sin duda el proyecto reformista de 1912 tomaba nota del empeinado reclamo de la Unión Cívica Radical, dirigida por Leandro N. Alem primero y por Hipólito Yrigoyen después, que desde 1890 impugnaba lo que llamaban el *régimen*. Natalio Botana ha explicado que la exigencia de esta minoría disidente pesó menos que las circunstancias internas de la elite política: ruptura de la unidad, preocupación por la legitimidad, búsqueda de la integración de la sociedad en torno del estado y creencia en la potencia regeneradora de la competencia electoral, que concluiría, en sus erróneos cálculos, con la inclusión de un tercio minoritario. Hubo un imperativo estatal para la transformación de habitantes en ciudadanos, que el presidente Sáenz Peña expresó con la fórmula *Quiera el país votar*.

La necesidad de consolidar las bases de legitimidad coincidió con una preocupación más general: la construcción de la nacionalidad y el

desarrollo de mecanismos de identificación e integración de la sociedad en torno del estado. Tal preocupación, común a todas las culturas democráticas de entonces, era aquí más viva debido al carácter inmigratorio —*aluvial*, según la fórmula de José Luis Romero— de la sociedad, así como a la necesidad de fundamentar adecuadamente la soberanía internacional del estado.

Progresivamente, la cuestión de la nacionalidad se fue haciendo conflictiva. Lilia Ana Bertoni ha señalado la declinación de la concepción originaria, en la que la *patria* era entendida en términos de un contrato voluntario entre ciudadanos, preocupados por que el estado garantizara a los habitantes las libertades y derechos individuales. Desde fines del siglo XIX —aquí y en muchas otras partes— se desarrolló una preocupación por encontrar un fundamento de la nación más allá de las contingencias históricas: una unidad fundada en la raza, la lengua, el territorio o quizás en el pasado histórico, cuando la *nación*, una realidad eterna, cobraba existencia efectiva.

Definir la nacionalidad significó discusiones y polémicas, pues ninguno de sus rasgos era evidente por sí mismo, y al dar prioridad a alguno de éstos se establecía quién pertenecía plena-

mente a la esencia nacional, quién quedaba relegado a un lugar marginal, residual y quién era ajeno a la nación y hasta era su enemigo. ¿El gaucho era un tipo residual y primitivo, o la esencia misma del ser nacional? Muchos intérpretes de lo nacional tuvieron la tentación de imponer su propio criterio por un acto de autoridad. Por ese camino, paradójicamente, lo que debía ser prenda de unión se convirtió en fuente de inacabables querellas, que se entrelazaron con las surgidas de la práctica democrática. En suma, la búsqueda de la unidad nacional fue traumática y conflictiva.

Esas querellas fueron tanto más vivas debido al entusiasmo con que la sociedad aceptó en 1912 las nuevas reglas del juego político. Los nuevos ciudadanos comenzaron el aprendizaje de la democracia y la construcción de un imaginario democrático que iba a soportar sin fisuras muchas confrontaciones con las poco halagüeñas prácticas de la democracia realmente existente. Las identidades políticas que se constituyeron desde entonces —la radical primero, y la peronista luego— tuvieron un arraigo y una fuerza singulares que trascendieron lo electoral, al punto que muchas de las prácticas sociales se politizaron profundamente.

Los ciudadanos aprendieron a serlo de maneras diversas pero concurrentes. Hubo una manera amplia, generalizada y más superficial: los nuevos partidos reclutaron sus cuadros entre grupos disidentes de las fuerzas tradicionales, y las nuevas identidades políticas, de carácter nacional, se adecuaron al cuadro de las luchas facciosas locales; en muchos lugares, especialmente en las provincias más tradicionales, los gobiernos siguieron usando el patronazgo y los empleos públicos para definir las elecciones. Las dádivas, generosamente distribuidas, solían ser financiadas con recursos provenientes, de alguna manera, del presupuesto nacional. En estos casos, la identidad política se asoció con líderes, imágenes y signos identitarios: desde el mate o el pañuelo con la figura de Yrigoyen —frecuentemente asimilado con un santón o con el mismo Jesús— hasta el retrato de Perón y Evita o la marcha peronista.

Otro tipo de aprendizaje caló más hondo, y tuvo como escenario distinto tipo de asociaciones civiles, que resultaron verdaderas escuelas de la democracia. En mutuales, clubes deportivos y sobre todo en sociedades de fomento, bibliotecas populares y cooperativas hubo un aprendizaje de la participación: hablar en públi-

co, escuchar, proponer, consensuar, liderar, seguir. Estas prácticas se nutrieron en una corriente cultural proveniente de los sectores intelectuales progresistas —los socialistas fueron los más visibles—, que difundieron ampliamente las ideas y valores propios del *ciudadano educado*, consciente, responsable y conocedor de los problemas sociales y políticos y de las alternativas. Su vigencia se mantuvo al menos hasta que con el peronismo se impusieron otros ámbitos de socialización, como los sindicatos, y otro modelo de ciudadano, más preocupado por lo que llamaban los aspectos *reales* y no meramente *formales* de la democracia.

La nueva política de partidos y la construcción de las maquinarias electorales, que permitían iniciar desde abajo un *cursus honorum*, abrieron una nueva vía para la aventura del ascenso, característica de esta sociedad. Así, las nuevas actividades ciudadanas se entrelazaron con las prácticas sociales y se potenciaron recíprocamente. Entendida como participación, la democracia fue un valor y una ilusión, que se mantuvo firme aun en períodos en que avanzó la manipulación gubernamental de las elecciones, particularmente después de 1930. En 1931 el presidente Uriburu, especulando con el gran

desprestigio de la derrocada UCR, jugó en una elección su proyecto de reforma constitucional corporativista y recibió un contundente rechazo. En 1936, en pleno *fraude patriótico*, la bandera de la democracia unificó al menos transitoriamente un *frente popular* de constitución problemática; los sindicatos comunistas y socialistas invitaron al ex presidente Alvear, jefe de la UCR, a participar en el acto del 1º de Mayo como *obrero de la democracia*. En 1946, en una elección decisiva y singularmente limpia, la Unión Democrática, que fue derrotada, reunió sin embargo las voluntades de algo menos de la mitad del electorado; Juan Domingo Perón, triunfador en la ocasión, levantó a su vez la bandera de la *democracia real*.

Debilidad republicana, avance militar

En realidad, hasta entonces la práctica democrática no se había traducido en instituciones representativas eficientes —las de la Constitución, revitalizadas por el impulso democrático—, por lo que estos ejemplos de fervor cívico resultan más llamativos. Más allá de la legitimada y fortalecida autoridad presidencial, el impul-

so democrático no llegó a plasmar en instituciones que intervinieran eficazmente en el procesamiento de los intereses y los conflictos sociales. En parte puede atribuirse a la insuficiencia de la revolución democrática de 1916, y la persistencia de amplios bolsones de *política criolla*, no beneficiados por la regeneración institucional del radicalismo. A eso puede sumarse, luego de 1930, la práctica sistemática del fraude electoral, que algunos presentaron como virtuoso. Pero había algo más.

No pueden negarse las credenciales democráticas de Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, líderes de las dos grandes experiencias democráticas de la primera mitad del siglo XX: la radical (1916-30) y la peronista (1946-55). Ambos triunfaron cabalmente en las elecciones en que se presentaron y ambos encarnaron de manera legítima el ideal de la *voluntad popular*. Puede discutirse sobre los alcances de sus políticas de gobierno respecto de la concreción de los intereses populares: sobre esto caben tantas opiniones como definiciones haya del colectivo *pueblo*. Para lo que aquí se analiza, en cambio, es pertinente señalar que ambos, cada uno a su manera, hicieron poco por empalmar adecuadamente la institucionalidad

constitucional previa con las nuevas formas políticas democráticas.

Probablemente ese empalme no era simple, e implicaba tensiones y hasta incompatibilidades, del estilo de las discutidas durante el siglo XIX, cuando se contraponía la libertad con la igualdad. Pero además ambos dirigentes no creían demasiado en esas instituciones, que eventualmente podían limitar su mandato popular y su obra regeneradora. Un primer dato es la escasa relevancia que para ambos tuvo el Congreso. Durante la Presidencia de Yrigoyen una mayoría normalmente opositora se opuso a casi cualquier iniciativa presidencial; a su vez, Yrigoyen se preocupó poco por lo que allí se pudiera discutir o acordar. Puede aducirse que esto se debió a mayorías sistemáticamente hostiles, tanto para Yrigoyen como luego para Alvear. Con Perón el gobierno tuvo amplia mayoría en las dos cámaras legislativas, no había bloqueo, pero el Congreso se limitó a aprobar las iniciativas del Ejecutivo, y éste solo requirió de él esa confirmación. Algunos años más tarde el presidente Frondizi —permanentemente jaqueado por el poder militar y el poder sindical—, pese a disponer de una amplia mayoría parlamentaria, no recurrió a esa institución para paliar en algo su inmensa

orfandad política. Tampoco el presidente Illia (1963-1966) se preocupó por gestar en el Congreso acuerdos políticos amplios que compensaran su debilidad de origen. En suma, lo que debía ser el centro de la política democrática republicana, la discusión y el acuerdo en el Parlamento, nunca jugó un papel importante.

En cambio la autoridad presidencial, potenciada por la figura del caudillo de masas, creció aún más. A medida que la organización del estado se hacía más compleja, un número mayor de funciones dependían directamente del vértice presidencial. La imbricación entre estado y partido de gobierno continuó avanzando hasta extremos asombrosos. Por otra parte, el radicalismo, y luego el peronismo se definieron como *movimientos*, que encarnaban la representación del pueblo o de la nación, investidos con la misión de regenerar la sociedad, y no como partidos: es decir, la parte de un conjunto. Pueden señalarse dos fuentes de esta concepción de la política. Por una parte, se trataba de un pensamiento democrático en estado puro, sin pizca de contaminación con la tradición liberal. Por otra, era la manifestación política de la idea integral de nación. Cada uno a su turno, los dos grandes partidos democráticos asumieron ser la

expresión del *pueblo* y de la *nación*: el radicalismo fue la *causa nacional*, y la *doctrina justicialista* devino en *doctrina nacional*. Los adversarios políticos fueron no solo enemigos del pueblo sino de la misma nación y la política se hizo inevitablemente facciosa.

En esos años, la distancia entre los enunciados y las prácticas era grande; ceñida a las palabras, la violencia política era por entonces mínima, en comparación con lo que llegó a ser posteriormente. Pero aun sin pasar a los hechos, lo cierto es que un discurso político de ese tipo no asignó a la oposición un lugar legítimo, como no fuera el de enemigo de la patria o *antipueblo*: el *régimen falaz y descreído* de Yrigoyen o la *oligarquía* de Perón. En esos términos, la nueva política democrática fue tan facciosa como lo había sido la política del siglo XIX, y mucho más al estar potenciada por el imaginario de la política de masas.

Lo verdaderamente asombroso es que ese faccionalismo se desarrollara en una sociedad donde, como se verá enseguida, los conflictos de intereses se desplegaban de una manera extremadamente mesurada. Así, durante el peronismo la conflictividad fue principalmente política, y si se quiere cultural, antes que específicamen-

te social. Este dato cambió rápidamente luego de 1955 y correspondió tanto a una agudización de la conflictividad social como a una intensa politización de los conflictos.

En 1955, la proscripción del peronismo y de sus principales dirigentes —una revancha acorde con el carácter faccioso de la política durante el peronismo— fue una decisión de enorme trascendencia: desde entonces comenzó la decadencia acelerada del imaginario democrático. Cuanto más predicaban los gobernantes de la *Revolución Libertadora* (1955-58) acerca de la democracia y la libertad, más vacías resultaban las instituciones, deslegitimadas por la proscripción, así como los presidentes electos en esas condiciones: Frondizi e Illia. Por otra parte, esa misma proscripción contribuyó a galvanizar la identidad peronista y a nuclearla alrededor de quienes, ausente el líder, resultaron ser la única voz del *pueblo peronista*. El enorme poder que tuvieron en el escenario corporativo, que se verá enseguida, se nutrió de esa representación vicaria. La debilidad de las instituciones democráticas fue en aumento, y facilitó y justificó la presencia creciente de las Fuerzas Armadas, que pasaron del pretorianismo a la dictadura.

A lo largo del siglo XX, las Fuerzas Armadas habían venido avanzando hasta instalarse en el centro de la vida política, en parte por la debilidad del escenario democrático, que abría el camino a quien era uno de los más poderosos actores del escenario corporativo, y en parte porque la evolución ideológica y cultural de la sociedad política autorizó una imagen que las Fuerzas Armadas cultivaron largamente: su carácter de instancia última, de depositarios y garantes de los supremos valores de la nación. Desde principios de siglo el Ejército se consolidó como institución y afirmó su presencia en la sociedad. Con el establecimiento del Servicio Militar Obligatorio, todos los ciudadanos debían pasar por sus filas al cumplir los veinte años.

De acuerdo con su versión de la historia nacional, el Ejército, que nació con la patria, la acompañó en cada paso de su crecimiento. Muchos otros políticos e intelectuales apelaron a definiciones de la nacionalidad que soslayaban su dimensión democrática y constitucional, como los discípulos locales de Maurras. Pero el discurso más eficaz fue el de la Iglesia Católica, que desde 1910 se sumó al elenco de quienes querían apropiarse de la definición de la nación. También la Iglesia descubrió que había es-

tado presente en el nacimiento de la patria y en cada una de sus instancias decisivas, e hizo un prolijo inventario de los sacerdotes participantes de cada uno de los eventos patrios. A la vez, desarrollaron la versión integrista del catolicismo, que dominaba la Iglesia romana desde principios del siglo XX; afirmaron que el católico debía actuar como tal en cada uno de los actos de su vida y sostuvieron que la Argentina era una nación católica, y que quienes no pertenecían a tal confesión no eran en esencia argentinos. Como ha mostrado recientemente Loris Zanatta, Ejército e Iglesia se vincularon y potenciaron, en torno a la noción radical y excluyente de *nación católica*, tan fuerte en 1943 como en 1966.

Con estas ideas, los militares irrumpieron una y otra vez en la política, derribaron gobiernos democráticos en 1930 y 1955, acabaron con la tambaleante legalidad en 1943 y condicionaron otra tambaleante legalidad en 1962. Las Fuerzas Armadas desarrollaron otra versión de la política facciosa: el enemigo fueron primero los *liberales* y *masones*; luego los *antidemocráticos*, secuaces del *dictador prófugo*. Desde 1960, con la incorporación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, fruto de estrechas relaciones con las

Fuerzas Armadas estadounidenses, el *comunismo* se instaló en el centro de la definición del enemigo de la patria; poco después, se transformó en el *subversivo apátrida*. En cada paso de la escalada, el escenario político resultaba corroído de una manera más definitiva. Consecuentemente, la negociación de los conflictos y los intereses se trasladó al escenario corporativo.

El conflicto social, las corporaciones y el estado

Las instituciones representativas fueron débiles en dos sentidos: para expresar el interés común, primero, y para constituirse como un control y balance eficaz en la negociación particular de los intereses. Este control se mantuvo ajeno al Congreso y se instaló en distintas regiones del estado, dependientes del Poder Ejecutivo.

Uno de los intereses particulares que primero avanzó sobre el interés común fue el de los gobiernos provinciales. De acuerdo con la Constitución de 1853, la República Argentina adoptó la forma de gobierno federal: estados provinciales autónomos y un Senado en el que las provincias estaban representadas en paridad, in-

dependientemente de su población. El Senado fue un organismo clave en el funcionamiento institucional y político, y el ámbito principal de la compleja relación entre el gobierno nacional y los provinciales. Allí se gestionaron, durante el período de expansión de la economía agroexportadora, variados subsidios a provincias pobres pero con peso en el escenario político. Así se protegieron las industrias del azúcar y del vino en Tucumán y Cuyo; los empleos públicos nacionales beneficiaron a los sectores educados y pobres de provincias; dirigentes provinciales complementaron su carrera política capitalina con el enriquecimiento, por ejemplo aprovechando los créditos de bancos estatales.

Luego de 1916, con el crecimiento del estado, en las provincias se multiplicaron oficinas y establecimientos; cada uno significó empleos públicos, tanto más importantes cuanto más pobre era la provincia en cuestión. En 1932, en el conjunto de medidas para enfrentar la crisis, se estableció el sistema de coparticipación impositiva federal y se asignó a cada provincia una porción fija de lo recaudado; era una forma de hacer realidad el célebre principio comunista: de cada uno según sus posibilidades, a cada uno en función de sus necesidades. La proporción

asignada fue otra de las cuestiones a negociar entre el gobierno nacional y las provincias. Se estableció un criterio de equidad pero a la vez se disoció la función de recaudación de la de ejecución y gasto; libres de responsabilidad y control, los gobiernos provinciales pudieron disponer sin trabas del presupuesto provincial con fines de patronazgo.

También desde 1930 se generalizó la protección selectiva de las economías regionales: el algodón, la yerba mate o el tabaco. Desde 1958, en el contexto del *desarrollismo*, se generalizó la promoción de actividades industriales mediante la exención impositiva; el mecanismo servía tanto a las grandes empresas como a las provincias menos favorecidas, donde se abrirían nuevas fuentes de empleo. Todos estos mecanismos, que implicaban la transferencia de fondos del presupuesto nacional a los estados provinciales, eran objeto de negociaciones políticas complejas, donde era factible el intercambio de favores.

Por otra parte, a lo largo del siglo XX el crecimiento económico y la complejidad creciente de la vida social dieron a los intereses económicos y profesionales un perfil cada vez más nítido, reforzado cuando fueron asumidos por instituciones corporativas, creadas para defen-

derlos. Estas instituciones surgieron como parte de un movimiento asociacionista singularmente intenso desde fines del siglo XIX. Las primeras asociaciones apuntaron sobre todo a la ayuda mutua y la defensa de los intereses de sus miembros. Hubo mutuales de tipo étnico, cooperativas, sociedades de fomento vecinal, profesionales, y en menor medida patronales, de evolución más lenta. Singular importancia tuvieron las organizaciones sindicales. Desde 1920 el sindicalismo de orientación anarquista fue desplazado por organizaciones orientadas a la negociación, cuyo modelo fueron por mucho tiempo los gremios ferroviarios. En la década de 1930 la sindicalización creció por impulso del crecimiento industrial, y luego de 1943 por estímulo del estado, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión. En 1945, los sindicatos tenían ya peso suficiente como para ser decisivos en la llegada al poder de Juan Domingo Perón.

En el marco de las asociaciones tomaron forma los intereses sectoriales conflictivos. Tempranamente se apeló al estado para que definiera las reglas, regulara los conflictos y garantizara los logros, franquicias y privilegios de cada corporación. Esa apelación coincidió con el avance estatal, para controlar y regular los dis-

tintos espacios de la sociedad. Así, el crecimiento del movimiento corporativo acompañó, *pari passu*, el desarrollo del estado.

Si se trataba de las modestas *sociedades de fomento* de Buenos Aires, encargadas del mejoramiento edilicio del barrio, hubo una proliferación de demandas, dirigidas a los niveles más bajos del estado: el funcionario de jerarquía menor o el representante en el Concejo Deliberante. Según ha estudiado Luciano de Privitellio, desde los años 20 el gobierno municipal reglamentó el funcionamiento de estas sociedades y creó el mecanismo del reconocimiento, que habilitaba para gestionar a una de ellas por cada sección de la ciudad. Ante esta franquicia, muchas sociedades de fomento quedaron marginadas o se dedicaron a otra cosa. Pero donde no las había, la nueva reglamentación las hizo surgir para aprovecharla, estimuladas pero a la vez controladas por el estado.

La concesión u obtención de una franquicia estatal fue un mecanismo propio de todas las asociaciones organizadas para la defensa de intereses sectoriales, que devinieron en verdaderas corporaciones. Fue el caso de los sindicatos. Hasta 1916, su reconocimiento por el estado era mínimo. Hipólito Yrigoyen inició esta política

de mediación, particularmente en el caso de las grandes huelgas de los ferroviarios y marítimos, que afectaban la exportación, pero lo hizo basándose en su autoridad, sin que hubiera un desarrollo de instituciones estatales específicas. En la década de 1930 el estado, que estableció los grandes instrumentos de intervención en la economía, aprendió a laudarse entre los intereses y a regular la competencia entre exportadores, productores rurales, importadores e industriales. Por entonces, los sindicatos obreros habían crecido considerablemente, sobre todo por el desarrollo industrial de los años 30. Salvo en casos aislados, como los trabajadores ferroviarios, no contaban con reconocimiento formal ni del estado ni de los patronos, aunque hubo esbozos de regulación de las huelgas y de concertación estatal.

Desde 1943 el estado se volcó a resolver por esa vía lo que proclamaba una amenaza para el orden social. El estado promovió la sindicalización, que se acompañó del reconocimiento del peso gremial y político de los sindicatos. La ley de Asociaciones Profesionales determinó la existencia del sindicato único por rama de industria, la *personería gremial* otorgada por el estado y el descuento de la cuota sindical por planilla. En

los diez años de gobierno peronista, el gobierno intervino ampliamente en la conformación de las direcciones sindicales, desplazando a aquellos dirigentes que querían mantener una acción política o gremial independiente, pero a la vez les aseguró a los sindicalistas disciplinados el monopolio de la representación sindical.

Los conflictos sociales, muy intensos inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial y también durante la década de 1930 y la Segunda Guerra Mundial, se atenuaron durante el peronismo. Si la conflictividad política fue muy fuerte, la específicamente social se apaciguó, debido a la prosperidad general, a las políticas de redistribución y promoción social, y también al estricto control por parte del estado. La *Comunidad organizada*, una concepción organicista formulada por Perón, extendió al conjunto de la sociedad, al menos idealmente, este modelo de organización corporativa, y le agregó un ingrediente político ideológico: la unanimidad en torno de la *Doctrina nacional justicialista*. A la vez, los sindicatos tuvieron un lugar importante en el estado y participaron en la definición de las políticas.

Un buen ejemplo de este balanceo e interpenetración —estudiado por Susana Belmartino—

es el fracaso del proyecto gubernamental de seguro de salud único, bloqueado por los sindicalistas en favor de las incipientes obras sociales, que tomaban como modelo el Hospital Ferroviario. A principios de la década de 1940 la Unión Ferroviaria, modelo de sindicato gestionado por socialistas, había construido su Hospital Ferroviario. Desde 1943 obtuvo de Perón concesiones varias: afiliación obligatoria de todos los trabajadores ferroviarios y descuento automático por planilla. El ejemplo cundió, y muchas organizaciones, sobre todo de trabajadores estatales, reclamaron un régimen similar, lo que hizo fracasar el proyecto de seguro de salud que por entonces impulsaba el ministro Ramón Carrillo.

Cada sindicato tendría, a la larga, los beneficios sociales que pudiera pagarse con los aportes de sus afiliados o con las contribuciones patronales que pudiera negociar. El estado se plegó ante el vigor del interés corporativo, pese a que este régimen no equitativo ponía en cuestión la propuesta de la *justicia social*. Puede vislumbrarse aquí el comienzo de la combinación de un estado con alta capacidad de intervención y de distribución de franquicias y prebendas, y a la vez con escasa capacidad de acción autónoma frente a los intereses que él mismo alienta.

Luego de la caída de Perón en 1955 los sindicatos fueron expulsados del centro del poder político y las políticas de racionalización capitalista, esbozadas desde 1952, pudieron desplegarse plenamente. Hubo recortes en el poder sindical en los lugares de trabajo, retroceso en los ingresos y reducción del empleo. Arreció la conflictividad social: la proscripción política del peronismo le dio a la resistencia gremial una bandera y una identidad política de gran capacidad de agregación. Esta historia, espectacular y heroica, tuvo otro costado, menos visible pero igualmente importante.

Luego de 1955 el estado conservó y acrecentó los instrumentos para intervenir en la economía y en la sociedad. Su capacidad de regular y de conceder franquicias —que aumentó con la política *desarrollista*— estimuló el fortalecimiento de las corporaciones: las sindicales, que recuperaron la ley que regulaba sus privilegios; las profesionales, que avanzaron en la colegiación; y las patronales, desagregadas para la defensa de intereses sectoriales y agregadas para los grandes combates sobre políticas estatales. Además de fijar el rumbo general, el estado adoptó permanentemente decisiones coyunturales, para enfrentar los ciclos económicos —devaluacio-

nes, retenciones y gravámenes— que pusieron a las corporaciones —particularmente las distintas organizaciones patronales y sindicales— en estado de permanente movilización, para presionar, defender y negociar. Por entonces, el deterioro del escenario específicamente político trasladó el grueso de la negociación social a la puja entre corporaciones, a la que se sumaron la Iglesia, defensora de una imprecisa *doctrina social*, y las Fuerzas Armadas, que se fueron convirtiendo en el árbitro de última instancia.

El estado se fue desgarrando en esta puja y no pudo defender un interés general que trascendiera los intereses corporativos. Retomando a Susana Belmartino, en 1970 el Ministerio de Bienestar Social extendió el sistema de obras sociales: todo trabajador debía aportar obligatoriamente a la de su sindicato. Según sus recursos, las habría ricas y pobres. Los dirigentes sindicales recibieron una prebenda inmensa —desde entonces los fondos de las obras sociales financian las actividades gremiales y políticas y alimentan una vasta corrupción—, cuya defensa pasó a ser el objetivo primero de la militancia sindical. Lo curioso es que la decisión bloqueó el proyecto de creación de un seguro social único, que la Secretaría de Salud Pública

negociaba simultáneamente con la corporación de los médicos. Un segmento de la burocracia estatal, en acuerdo con los dirigentes sindicales, logró un triunfo a costa de otro segmento, que negociaba con la otra corporación implicada. Médicos y sindicalistas compitieron en el seno de un estado que sacrificaba su autonomía y se convertía en el premio mayor de la lucha.

2. Clímax y anticlímax

Tres procesos —la crisis del ideal democrático, la exacerbación de los reclamos corporativos y las pasiones autoritarias de autopostulados salvadores de la nación— se conjugaron de manera catastrófica entre 1966 y 1976. Pero en otro sentido, fue una década admirable, en la que la sociedad toda se puso en movimiento, buscando plasmar un futuro mejor, al margen del estado y en franca rebeldía contra él. Fueron diez años de conflicto, en los que las elecciones de 1973 y el retorno de Perón constituyeron una tregua, superficial y efímera. También fueron años de ilusión. La combinación de viejos conflictos y nuevas expectativas tuvo un efecto explosivo y destructor: un violento combate cuyos protagonistas no coincidían con lo que ellos mismos afirmaban ser y en el que las opciones en juego eran confusas y engañosas. Hubo bandos, pero no alternativas. Al final, se estableció una paz sepulcral, la Argentina vital desapareció y quedó instalada la Argentina de la decadencia.

Analizaremos aquí este movimiento de clímax y anticlímax.

La oleada revolucionaria

En 1966 las Fuerzas Armadas asumieron el poder del estado de manera institucional y designaron presidente al general Juan Carlos Onganía. La Revolución Argentina --tal el nombre autoasignado-- se proponía una refundación completa de la sociedad de acuerdo con un plan en etapas que, según decían, tenía objetivos y no plazos. En primer lugar, sanear y expandir la economía; luego, atender a las necesidades sociales y promover una nueva organización comunitaria; finalmente, dar forma a una nueva institucionalidad, basada en la representación funcional y orgánica. La democracia representativa había quedado definitivamente abolida, algo que --síntoma de los nuevos tiempos-- pocos lamentaron por entonces.

Respecto del primer objetivo contaban con el apoyo del sector más concentrado del empresariado, para quien la puja corporativa significaba un obstáculo y una molestia. El ejercicio dictatorial del poder permitió al estado acallar

los reclamos sectoriales e imprimir un rumbo definido a la economía; la política del ministro Adalbert Krieger Vasena favoreció a las empresas más grandes, en su mayoría de capital transnacional, mediante premios a la eficiencia y protección al mercado interno. El desarrollo de las fuerzas productivas, aunque en lo inmediato creó conflictos y tensiones, fue importante en el mediano plazo y generó condiciones favorables también para una parte no menor de las empresas argentinas, incluyendo al renovado sector agropecuario. Hacia 1973 --cuando se celebraron las elecciones que trajeron a Perón de nuevo al poder-- el sector productivo estaba funcionando a pleno, aun cuando se padecían los problemas de una de las habituales crisis cíclicas.

La distribución de los frutos de esa bonanza dependía en buena medida de decisiones del poder estatal --en materia cambiaria, salarial o impositiva--, de modo que el crecimiento exacerbó los tradicionales conflictos sectoriales y la puja por la distribución, un ingrediente importante para comprender la movilización y politización de esos años. Visto en una perspectiva más larga, puede advertirse que esta última modalidad de crecimiento comenzaba a alterar al-

gunos de los rasgos salientes de la larga expansión, particularmente por la tendencia a la contracción del mercado de trabajo y la aparición de la desocupación tecnológica. Esta situación tuvo consecuencias negativas sobre la tendencia de la sociedad a la movilidad y la incorporación. En las dos décadas anteriores a 1976 ya era visible que ese tránsito era cada vez más lento, e incluso que el carril de retorno se ensanchaba. Desde mediados de la década de 1960 fue visible que un título universitario estaba lejos de garantizar una buena posición social; que el obrero altamente calificado rara vez se convertiría en pequeño tallerista, y que la anhelada casa propia solo sería una casilla o un rancho mejorados. Es posible advertir en estos cambios las raíces de una mayor crispación en los conflictos sociales.

La movilización de la sociedad, hasta entonces aquietada por la represión autoritaria, se inició a fines de 1968 y tuvo un primer episodio espectacular en el Cordobazo de mayo de 1969. De ahí en más, se desplegó, en un *crescendo* que no se detuvo hasta 1973, cuando asumió el gobierno peronista; después se mantuvo, pero sin la unanimidad e inocencia iniciales. Fue una movilización variada y con una gran capacidad de agregación. Por un lado, un nuevo sindica-

lismo, que desbordaba los límites de la tradicional *burocracia sindical* —fortalecida desde 1955 en la negociación de retaguardia— y ensayaba nuevas formas de protesta y de organización. Por otro, distintos segmentos de empresarios y comerciantes, pequeños y medianos, con base en las economías regionales. También un movimiento estudiantil que se politizó profundamente. Y como jalones, distintas explosiones urbanas, en las que éstos y muchos otros salían a la calle y por dos o tres días desbordaban los controles policiales o militares. Todo sumaba fácilmente en la lucha contra el enemigo común: la dictadura y el imperialismo, personificados en las figuras del presidente Onganía y su ministro Krieger Vasena.

Sus banderas iniciales fueron la lucha contra la dictadura y el imperialismo. Fue una movilización revolucionaria que, en el imaginario social, se nutría de diversas fuentes: la experiencia cubana, la guerrilla latinoamericana, los movimientos estudiantiles, la prédica de los sacerdotes tercermundistas. Mensajes tan diversos, y en muchos aspectos inconciliables, se combinaron y fundieron con un reclamo menos reflexivo pero hondamente arraigado en la experiencia: la *vuelta de Perón*, que para sus antiguos y

fieles seguidores, y para los recién llegados al movimiento, sería sin lugar a dudas la panacea.

Se trató de un proceso social y cultural con pocos precedentes, por la rapidez y hondura del arraigo y lo contundente de sus efectos. Para todos los que, de una u otra manera, participaban de este espíritu, la sociedad ideal estaba al alcance de la mano: bastaba una acción política firme y correctamente dirigida para cambiar los datos de la realidad. Era una acción intrínsecamente buena, aunque recurriera a métodos discutibles, pues se trataba del bienestar del pueblo, al que solo podían oponerse sus enemigos. No se admitían intereses particulares que pudieran anteponerse a la acción en beneficio de todos, pues en realidad lo personal y lo público se fusionaban en un único y gran combate. Brotaron todo tipo de organizaciones que enlazaban su práctica particular con la gran transformación: a los sindicatos obreros y los estudiantes se agregaron los pequeños empresarios, los abogados, los artistas, psicoterapeutas, arquitectos, sacerdotes y hasta militares. La creatividad social de estos años fue notable, como lo fue la emergencia de la solidaridad, el sacrificio y otros valores igualmente estimables. Fue una primavera de los pueblos.

La fórmula política para semejante despliegue de activismo y buena voluntad fue mediocre y sesgada. Un dato significativo fue la ausencia de propuestas democráticas, y en general su escasa valoración, por el rápido y profundo deterioro local y por el atractivo universal de otras alternativas. También fallaron otro tipo de propuestas fundadas en la confrontación de clases, como la del sindicalismo antiburocrático. Las alternativas centradas en la acción armada, surgidas a partir del ejemplo cubano, tuvieron fuerte predicamento. Su formación no remitía al Cordobazo y a la movilización social; eran anteriores, y por su estrategia estaban preparadas para actuar sin una respuesta popular inmediata. Al iniciarse la movilización, se acercaron al movimiento social en sus distintas expresiones, en parte para reclutar nuevos miembros y en parte para darle una dirección política a las acciones espontáneas. En este terreno, les pasó algo parecido a lo ocurrido con las organizaciones de izquierda más clásicas: aunque pudieron recoger simpatías, chocaron con un límite, pues buena parte de los movilizados confiaban, en primer lugar, en la vuelta de Perón.

Triunfó la propuesta que supo combinar el imaginario revolucionario con la mítica aspira-

ción a la vuelta de Perón. La organización armada Montoneros logró una fuerte inserción en el movimiento popular. Sus cuadros iniciales provenían del activismo católico, y en muchos casos conservaban la impronta de la intransigencia integral de los años de la entreguerra, combinada con los contenidos doctrinarios de Medellín y el tercermundismo. Se acercaron al peronismo sin arrastrar ni un pasado ni culpa alguna, como le ocurría a los grupos de izquierda; tampoco debían excusarse ante los peronistas, que tenían una desconfianza visceral por los *zurdos*. Ambas características han sido señaladas por Carlos Altamirano. Él agrega otra diferencia con los grupos de izquierda: en ese acercamiento no vieron en el peronismo una figuración o velo de la *clase obrera*, el auténtico sujeto revolucionario, sino que lo tomaron como lo que ellos pretendían ser, el *pueblo peronista*, y asumieron que su tarea consistía en profundizar la contradicción política entre peronistas y antiperonistas. Su acto fundacional fue el asesinato del general Aramburu, responsable de los fusilamientos de 1956 y figura emblemática del *gorilismo* o antiperonismo. Esta acción nos lleva al planteo de otra dimensión de la política en el clímax argentino: la violencia.

El origen de la violencia como práctica política es muy anterior a los años 60, aunque nunca tuvo la virulencia de entonces. En 1880, concluido el ciclo de las guerras civiles que condujo a la formación del estado argentino, la violencia política quedó replegada en un lugar marginal, más episódico que constitutivo. Sin embargo no faltó. La hubo en 1910, con los anarquistas y las *bandas blancas*, y entre 1917 y 1921, cuando la Liga Patriótica acompañó la represión militar; también en 1930, con torturas y fusilamientos, y durante los años de gobierno de Perón, cuando hubo torturados, al menos dos asesinatos políticos, y también un despliegue de terrorismo antiperonista.

Por otra parte, junto con el advenimiento de la política de masas, fue creciente la pasión discursiva, la apelación verbal a la violencia regeneradora, que corroyó la noción de derechos y garantías. Es posible relacionarla con las concepciones integristas de la nacionalidad y la política, y la división del campo en propios y ajenos, amigos y enemigos. Progresivamente se instaló la idea de que, dadas ciertas circunstancias, en política los fines justificaban los medios.

En 1956 hubo un salto cualitativo: el gobierno de la *Revolución Libertadora* ordenó fusilar a

los jefes de un levantamiento militar peronista, mientras que hacía lo mismo de manera casi clandestina con un número indeterminado de civiles. A lo largo de los años 60, creció la guerrilla, inspirada en Cuba y en sus secuelas; también la contrainsurgencia, que los militares aprendieron en la Escuela de Panamá, empujando al estado a la acción clandestina. Ubicada en el contexto revolucionario de los 60, la violencia se justificó por la violencia del enemigo; pero sobre todo era un instrumento adecuado para el cambio. Un paso más en ese camino fue afirmar que la violencia era --resuenan los ecos de Sorel y de los movimientos fascistas-- no ya un instrumento sino la práctica fundadora de la revolución: matar al enemigo era construir la nación.

En lo político, Montoneros fue la más exitosa de las agrupaciones guerrilleras. Nació de un asesinato a sangre fría; durante su existencia continuó con las *ejecuciones* y además practicó un verdadero culto de la muerte heroica. Sus enemigos dentro del peronismo, vinculados con el ministro José López Rega, no eran muy diferentes: según la consigna de una de sus publicaciones, *El mejor enemigo es el enemigo muerto*. Quince años atrás, el presidente Perón podía

proclamar *al enemigo, ni justicia*, sin que sus palabras se tradujeran en actos irrevocables; a comienzos de los setenta no solo se pasaba a la acción, sino que ésta era ampliamente celebrada. Si no se conocía la causa, la opinión concedía a sus ejecutores el beneficio de la duda: por algo sería.

Montoneros se identificó plenamente con el peronismo y con Perón. Éste, exiliado en Madrid desde 1955, los incorporó dentro del amplio ejército con el que venía librando una batalla de final incierto, destinada a desestabilizar cualquier alternativa política que no lo incluyera. De modo que los bendijo, y los usó como ariete contra el gobierno militar y contra otros sectores peronistas a quienes quería limitar en su accionar, como los que aspiraban a *un peronismo sin Perón*. Montoneros, a su vez, desarrolló una notable habilidad para identificar sus consignas y su línea política con las palabras y directivas de un Perón lejano, que difícilmente hubiera querido o podido desmentirlos.

Esa libertad discursiva, analizada por Eliseo Verón y Silvia Sigal, les permitió, finalmente, movilizar y encuadrar a un vasto conjunto de agrupaciones sectoriales, que daban una expresión primaria a las inquietudes políticas del mo-

vimiento social, incluyéndolas a todas en la Juventud Peronista. Este organismo de masas, espontáneo en su base y encuadrado y disciplinado por Montoneros, resultó muy adecuado para la acción en la etapa siguiente, cuando el gobierno militar rehabilitó la escena política y reabrió el juego electoral.

Obsérvese la distancia entre las ilusiones iniciales, ciertamente difusas, de la movilización social, y la última expresión, acotada en sus fines y más que pragmática en sus medios, encarnada en Montoneros. A partir de 1971 el presidente del gobierno militar, general Alejandro Lanusse, estableció un intenso diálogo con los partidos políticos y con la cúpula de las organizaciones sindicales: se trataba de neutralizar la ola de descontento social, potenciada por las organizaciones armadas, y llegar a unas elecciones concertadas. La negociación tuvo muchas idas y venidas hasta concluir en un punto mínimo: ni Perón ni Lanusse serían candidatos. Así, el anciano caudillo pudo retornar al país, recuperar su grado militar, acordar con todas las fuerzas políticas democráticas, organizar su propia propuesta electoral y proponer un candidato de plena confianza: Héctor J. Cámpora, su delegado personal. En ese escenario, que en pocos

meses había cambiado completamente, Montoneros también cambió: decidió participar en las elecciones y movilizar tras la candidatura de Cámpora al conjunto de la Juventud Peronista. En realidad, se disponían a luchar para convertirse en la cabeza del movimiento peronista.

La vuelta de Perón

En 1973, en elecciones sin proscripciones, se impuso el candidato propuesto por Juan Domingo Perón. Seis semanas después de asumir, el presidente Cámpora renunció y Perón fue electo presidente, con amplia mayoría. Fue una singular experiencia democrática, más plebiscitaria que republicana, que a falta de instituciones asentadas, reposaba en la atribuida capacidad de Perón para neutralizar y encauzar los conflictos. Como en experiencias democráticas anteriores, estos conflictos, que eran muchos, no se procesaron en los espacios institucionales establecidos por la Constitución sino en otros, de acuerdo con reglas en las que el número, la fuerza, la organización y hasta el entrenamiento bélico se anteponían a la razón. Mientras tanto, en el Congreso las fuerzas políticas minori-

tarias se esforzaban en colaborar con el presidente y ayudarlo a mantener una legalidad que progresivamente fue más difícil de sostener.

Hubo en 1973 un consenso general: Perón era el único que podía desanudar la crisis, presente en varios frentes a la vez. Pero las expectativas y las dificultades exacerbaron los conocidos conflictos corporativos y fue muy difícil para Perón acordar soluciones transaccionales y concretar su programa de reconstrucción del estado. Puso en juego su prestigio personal, respaldado por una masiva legitimidad plebiscitaria. No resultó, y en parte se debió a sus propias falencias: por entonces el anciano presidente se parecía al Perón de 1945 tanto como el estado de 1973 se asemejaba al de la segunda posguerra.

Lo decisivo fueron los problemas objetivos. Se advertían en 1973 síntomas de agotamiento de la tendencia expansiva de la economía, acechada tanto por los problemas del mundo —la primera crisis petrolera— como por sus propias y acumuladas dificultades: inflación, conflictos distributivos, recurrencia a la recesión como remedio. Quizá se trataba de una nueva dificultad cíclica, en la que cabía una recuperación; quizá la vasta reestructuración capitalista de las décadas finales del siglo indicaba el límite de este ti-

po de crecimiento, fundado en el mercado interno y la regulación estatal. En cualquier caso, los problemas de 1973 se traducían en dificultades crecientes para el secular proceso de ampliación e incorporación social; en particular, se manifestaba en la imposibilidad de satisfacer las ilusiones de quienes habían confiado en que el retorno de Perón fuera también el retorno de la bonanza de 1945.

A fines de 1973 la crisis cíclica activó la clásica reacción de partes: cada corporación se dedicó a presionar al estado para arrancarle una solución satisfactoria, haciendo valer el poder logrado con el control de alguna de sus porciones. Había un dato nuevo: desde 1972 el activismo popular salió de la semiclandestinidad y se volcó ampliamente a las calles; a la movilización electoral siguió, sin solución de continuidad, la reivindicativa. Otra vez, Montoneros mostró una gran capacidad para encuadrarla: una de sus ramas, la Juventud Trabajadora Peronista, presionó desde las fábricas sobre la dirección de los sindicatos, de modo que sus dirigentes —la *burocracia sindical*, ducha en el arte de la transacción— tuvieron un margen mucho más estrecho para negociar y debieron hacerse cargo de muchos de los reclamos. Los empresarios, por

su parte, prefirieron no oponerse a las condiciones impuestas por los sindicalistas, ahora poderosos, y se limitaron a trasladar a los precios los mayores costos salariales.

Muchos de quienes apoyaron la vuelta de Perón esperaban de él una mano fuerte, y que el estado recuperara su capacidad para conducir con autoridad los conflictos, como el distributivo. En 1973 parecía factible volver a poner en pie al estado. Con el respaldo de una legitimidad plebiscitaria, Perón utilizó la fórmula de 1945, el Pacto Social; se firmó un acuerdo entre la cúpula de los empresarios, cuya unión se forzó, y la cúpula sindical: una y otra parte se comprometían a mantener estables precios y salarios. Perón constató la estructural infidelidad de sus firmantes. Los peronistas, viejos o nuevos, podían ofrecer el sacrificio de su vida, pero no el de sus intereses. En su último discurso público, una fría mañana de junio de 1974 en la Plaza de Mayo, Perón calificó de *sabotaje de pigmeos* las acciones de sindicalistas y empresarios y proclamó: *ya pasaron los días de exclamar "la vida por Perón"*.

Si bien el conflicto interno del peronismo ocupó el primer plano en estos tres años notables, fue el colapso del Pacto Social el que sig-

nó el fracaso del gobierno peronista. Así lo ha señalado Juan Carlos Torre. Perón apenas consiguió mantener un precario equilibrio entre empresarios y sindicatos, que se derrumbó a poco de su muerte. Después, la puja corporativa se desmadró —en 1975 la jerarquía sindical le hacía una huelga a la viuda de Perón y presidenta de la República—, y la economía entró en la espiral de inflación y parálisis propia de las crisis clásicas.

Al mismo tiempo, se derrumbaron los mecanismos de control que mantenían dentro de parámetros relativamente civilizados la lucha política que dividía al peronismo. De un lado, toda la *tendencia revolucionaria*, que encabezaba Montoneros y se movilizaba tras las banderas de la Juventud Peronista. Del otro, los cuadros del sindicalismo y junto a ellos otros segmentos provenientes del peronismo político. En un cierto sentido, dividía a quienes provenían de la experiencia de la movilización social reciente y a quienes, mejor insertados en los aparatos sindicales y políticos tradicionales, la habían contemplado a distancia. En otro sentido, la división provenía de dos lecturas distintas de las palabras de Perón y consecuentemente del sentido de su retorno. Para unos se trataba de la restauración

del viejo peronismo, fundado en la distribución de la prosperidad; para otros, del comienzo de una profunda transformación hacia lo que, de manera no muy precisa, se denominaba la *patria socialista*.

En términos más pobres, los que chocaron fueron dos poderosos aparatos que querían ganar el control del movimiento peronista, adivinando quizá que la vida del líder se acercaba a su fin. En su lucha, unos y otros recurrían al viejo argumento: atribuirse la representación del pueblo y colocar a sus enemigos en el campo de los enemigos del pueblo. ¿Cuál era el lugar de Perón? Desde que retornó definitivamente al país, no cesó de indicar con claridad su repudio a Montoneros y su opción por los viejos dirigentes, a quienes necesitaba de manera imprescindible para el Pacto Social. Montoneros optó por no darse por aludido: *Perón estaba cercado por su entorno*, fue la explicación.

Desde 1972 la lucha entre las dos tendencias se dirimía en las calles, a veces con violencia, como en Ezeiza el día del retorno al país de Perón. Progresivamente, la competencia callejera fue sustituida por los asesinatos y la guerra de aparatos militares: el de Montoneros y el que se construyó con grupos de choque sindicales y

elementos policiales, conocido como Triple A. Después de la muerte de Perón, Montoneros pasó a la clandestinidad, mientras las Fuerzas Armadas se hacían cargo de la represión, por orden de la presidenta Isabel Perón, y desplazaban a los grupos paramilitares de la Triple A. En 1975 obtuvieron un primer éxito contundente con el exterminio del foco guerrillero montado en Tucumán por el trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo. En marzo de 1976 se derrumbó el gobierno de Isabel Perón, las Fuerzas Armadas se hicieron cargo del poder y comenzó la fase más terrible de la violencia política.

La dictadura militar: lo nuevo y lo viejo

Con su intervención, las Fuerzas Armadas pusieron fin a la crisis, mediante unos procedimientos que excedieron largamente los alcances de intervenciones militares anteriores. Al tiempo que restablecían la estabilidad política, destruyeron las bases de la Argentina vital.

Diremos aquí algo sobre la manera en que hicieron las cosas, y dejaremos para el próximo capítulo las cosas hechas, irrevocables. La manera militar de resolver la crisis fue excepcional,

desmesurada y horrorosa. Pero no fue inesperada ni absolutamente original. El Proceso de Reorganización Nacional --tal la denominación que adoptó la última dictadura militar-- trabajó con materiales conocidos, y quizá por esa familiaridad logró el mínimo consenso que necesitaba.

La violencia ejercida de manera clandestina por el estado desde marzo de 1976 alcanzó niveles nunca vistos en el país. Hubo una cantidad inmensa de muertes y *desapariciones*; también campos de concentración, tortura y exterminio, depredación de bienes y robo de niños. Pero la violencia no era nueva: estaba ya ampliamente instalada en la vida política, aunque sin duda las diferencias de cantidad hacen a las de calidad. Lo novedoso fue que desde 1976 la ejecutó un estado clandestino, que operaba de noche y aparentaba normalidad de día; además de matar, derrumbaba la fe en las instituciones y las leyes, sistemáticamente violadas por quienes debían custodiarlas. Otra vez, hubo diferencias de cantidad, pero en un rumbo ya conocido: las actividades del terrorismo de estado eran reconocibles y hasta aceptadas por muchos, en tanto arraigaban en tradiciones y prácticas políticas conocidas.

El *Proceso* se caracterizó por la convicción de que un rígido autoritarismo y la concentración del poder, no limitado por restricciones jurídicas, solucionarían el problema de falta de autoridad del estado. La idea tenía precedentes, no solo en los períodos de gobierno militar sino en las etapas democráticas, que como se vio fueron escasamente republicanas. En este aspecto el *Proceso* --que continuó la tradición militar de denunciar el desgobierno en los civiles ignorando la anarquía en su propio campo-- fracasó contundentemente. No se logró nunca que tuviera un punto de concentración ni resultó el singular experimento de dividir el poder entre las tres fuerzas: el general Jorge Videla, presidente durante los cinco años iniciales, fue un protagonista mediocre, y sus sucesores mucho más. Cada fuerza se reservó un área de influencia para el ejercicio de la represión y del gobierno, y los jefes de cuerpos militares transformaron los gobiernos provinciales en sus feudos, de modo que los complejos procesos de negociación de intereses en el seno del estado continuaron de manera aún más espuria.

También caracterizó al *Proceso* su voluntad de identificarse imaginariamente con la nación. Al declarar los gobernantes que asumían la cus-

todia de sus intereses supremos, las voces divergentes o alternativas pudieron ser eliminadas en nombre de la nación; lo fueron, no solo de manera discursiva como hasta entonces, sino, también, físicamente. Ambas maneras se complementaron. El terror, la tortura y las desapariciones también permitieron a los militares acallar toda otra voz y hasta negar su existencia legítima: cualquier disidencia era atribuible a la *subversión apátrida* y estaba, por definición, fuera de la nación. Es difícil ignorar las profundas raíces que esta negación del otro tiene en nuestra cultura política contemporánea: tuvieron éxito, porque machacaron en terreno conocido.

Incluso apelaron, con éxito, a la pasión nacionalista y a su habitual combinación de soberbia y paranoia. Según una arraigada tradición ideológica, plasmada hasta en los libros de texto, la Argentina tiene asignado un destino de grandeza, no concretado por la falta de temple de la mayoría y por la acción concertada del enemigo externo y del interno. Desde entonces, esa pasión estuvo muchas veces lista para emerger, apenas se frotaba la lámpara, para legitimar los autoritarismos. Estos militares lo intentaron con el Campeonato Mundial de Fútbol, que se jugó en la Argentina en 1978, con el conflicto

con Chile ese mismo año, y finalmente con la Guerra de Malvinas. Con ésta casi tuvieron éxito: en 1982 produjo un momento de enajenación, cuando tantos argentinos creyeron que el destino nacional se asociaba con esta nueva aventura militar. La guerra selló el destino de la dictadura; la sociedad la culpó, no tanto por el intento de querer consagrarse con una guerra triunfal cuanto por haber fracasado en ese intento.

En buena medida, la política económica elegida estuvo en consonancia con el propósito de reducir el conflicto político que, según un diagnóstico perspicaz, tenía una de sus raíces en las pujas corporativas. La política del ministro José Alfredo Martínez de Hoz, que condujo la economía entre 1976 y 1981 sirvió --no afirmamos que deliberadamente-- a los fines de la represión: quitar a los llamados *subversivos* su base, aplacar los conflictos sociales y particularmente los industriales, la ríspida lucha entre corporaciones de patronos y trabajadores, y la necesaria acción mediadora del estado. A juicio de los nuevos gobernantes, esto derivaba en dos situaciones que se habían tornado intolerables: enfrentamientos que desbordaban la capacidad

de control o asociaciones espurias y colusivas. De acuerdo con la nueva doctrina neoliberal, el mercado debía disciplinar la sociedad.

La solución fue la apertura de la economía y la reducción de la intervención del estado. Una sangría que bajó la fiebre del enfermo pero lo dejó exangüe. Se logró reducir la potencia de los actores del conflicto industrial --los sindicatos y las corporaciones empresarias sectoriales-- y a la vez se achicó el premio de la lucha: la capacidad de intervención del estado empezó a ser desmantelada. Sin embargo este camino fue recorrido solo a medias; los militares no renunciaron a lucrar con las empresas estatales y de paso enriquecer a los empresarios que actuaban como contratistas: por entonces, grandes grupos económicos se constituyeron, crecieron exprimiendo al estado y se convirtieron en soportes del régimen.

La decadencia del estado se profundizó, a medida que se profundizaba la corrupción de sus instituciones. Amplios sectores de las Fuerzas Armadas y de Seguridad participaron en la rapiña que acompañó el terror, hicieron de las armas estatales el instrumento de negocios privados y se perdieron definitivamente los límites éticos e institucionales, sin que los gobiernos

posteriores a 1983 pudieran revertir esta situación. Los acompañó una parte de los jueces, que aprendieron a tolerar, encubrir y participar, y por ese camino siguió una buena parte de los funcionarios. Muchos empresarios se habituaron a jugar con estas reglas, preparándose para el proceso de privatización posterior a 1989. La corrupción llegó a las mismas normas legales: el estado, aun en su parte diurna y legal, hizo gala de la arbitrariedad, subordinando la norma jurídica al ejercicio discrecional del poder.

De modo que a aquellas prácticas del terrorismo de estado se agregó una segunda cadena de complicidades, que se hundió en lo profundo de la sociedad y llegó a convertirse en hábito aceptado; dejó una herencia de funcionarios, policías y jueces corruptos y acostumbrados a vivir en la corrupción, y una pobre idea del respeto a la ley, siempre subordinada a otras necesidades prácticas. Hubo una exitosa pedagogía de la corrupción y la arbitrariedad, que derrumbó al estado, y también su credibilidad.

3. La Argentina decadente

Las políticas iniciadas en 1976, mantenidas en el cuarto de siglo siguiente con cambios solo menores, definieron los rasgos principales de una nueva Argentina, decadente y empobrecida: economía abierta a los fluctuantes capitales financieros, fuerte endeudamiento estatal, destrucción del aparato productivo, altas tasas de desocupación, una sociedad empobrecida y polarizada y un estado corroído, débil e impotente. Paradójicamente, esta Argentina en declinación conoció finalmente, en las dos últimas décadas, la democracia republicana y liberal, y creyó en ella. Esta curiosa coexistencia desemboca en un abrupto final, que es nuestro principio: la crisis de 2002.

El paraíso neoliberal en versión argentina

Las políticas de Martínez de Hoz forman parte de un proceso común al mundo capitalista: el advenimiento del nuevo consenso econó-

mico neoliberal --el llamado *Consenso de Washington*--, caracterizado por la doble propuesta de la reforma y el ajuste. Según la nueva fe, las crisis recurrentes, juzgadas insolubles en el marco del Estado de Bienestar, se superarían con la apertura de la economía, la eliminación de los controles al flujo de los capitales financieros y la supresión de la protección y otros subsidios estatales. Este conjunto de estímulos habría de provocar el fin de los sectores ineficientes, sobre todo los industriales, y el crecimiento de los más competitivos. La reducción de subsidios era parte de una propuesta más general de ajuste de los gastos estatales --se juzgaba que las economías no estaban en condiciones de solventarlos de manera genuina-- e incluía la eliminación de sus partes más débiles y poco eficientes, pero también la retracción en campos vinculados con el bienestar social, y hasta la educación y la salud, donde su acción solo debía ser subsidiaria.

Se trataba de una línea de acción genérica. Según una conocida imagen, se abrieron las puertas de la jaula estatal y el tigre capitalista comenzó a correr libremente, destrozando hasta a aquellos que por un instante lograron cabalgarlo. Esta línea general podía ejecutarse en cada caso de manera diversa, según se atendiera

más o menos a la gradualidad, la previsión y la equidad. En términos generales, en la Argentina se adoptó la peor manera.

La experiencia del *Proceso* mostró que era más fácil abrir la economía y reducir los instrumentos de control del estado, que eliminar a quienes medraban con él. El endeudamiento externo, producido durante el período de afluencia de capitales entre 1978 y 1981 --en nuestro recuerdo, la *plata dulce*-- dejó al estado fuertemente condicionado frente a los acreedores y a los organismos internacionales de crédito, interesados en la aplicación del nuevo rumbo económico; de modo que desde entonces resultó muy difícil volver atrás en el camino adoptado.

Así resultó durante el primer gobierno democrático, presidido por Raúl Alfonsín (1983-1989). Aunque la transformación económica no estuvo entre sus prioridades --definió su gobierno como de *transición democrática*-- debió encarar la cuestión al comprobar que la situación de vulnerabilidad externa dejada por el endeudamiento transformaba las crisis cíclicas en fenómenos ingobernables. La de 1985 se superó con el *Plan Austral*, que tuvo éxito en estabilizar la moneda. De allí en más, parece haber

habido una coincidencia general con la propuesta de reforma y modernización, en su versión más gradual, previsor y equitativa; así lo indica el *Discurso de Parque Norte* pronunciado por Alfonsín, que muestra, por otra parte, la amplia gama de posibilidades existentes en la propuesta neoliberal. Pero Alfonsín, que priorizó otras cuestiones, no encaró el problema hasta el último tramo de su gobierno, cuando ya no tenía fuerza política para ponerlo en marcha. Finalmente, una nueva y más profunda crisis cíclica lo obligó en 1989 a abandonar la Presidencia antes del término establecido.

Ese año, poco después de estallar la hiperinflación, fue electo presidente el justicialista Carlos Menem (1989-99), reelecto en 1995, luego de haberse reformado la Constitución en 1994. A diferencia de Alfonsín, y repudiando toda su tradición política, Menem asumió plenamente el programa de la reforma y el ajuste; lo aplicó en su versión más simple, tosca, brutal y destructiva: apertura financiera irrestricta y privatización descontrolada de las empresas estatales. Su consigna *cirujía mayor sin anestesia*, como subrayaron Vicente Palermo y Marcos Novaro, suponía una sobreactuación. También señalan estos autores que, para reunir el poder político nece-

sario para tal transformación, debió hacer innumerables concesiones --la *anestesia* que decía no utilizar-- a empresarios contratistas, gobiernos provinciales, sindicalistas y congresistas. Su éxito inicial se correspondió, al igual que el de Martínez de Hoz, con un período de gran afluencia de capitales externos y de fácil endeudamiento, que le permitió estabilizar la moneda, atándola, con la ley de Convertibilidad, a un dólar que llegaba fluidamente. Como en los casos de 1981 y 1989, el límite de su éxito, visible desde 1997, lo marcaron el final de la afluencia fácil del financiamiento externo y el rápido retiro de los capitales especulativos.

La nueva Argentina

Fueron, en suma, tres golpes de volante para un giro copernicano, cuyos efectos pueden evaluarse en conjunto: la nueva Argentina de la decadencia se parece muy poco a la vieja, de la prosperidad. Sin embargo, se impone un *caveat*. El pozo de la crisis no es el lugar más adecuado para evaluar estos cambios, para percibir con claridad --entre lo mucho que se destruye-- qué es lo nuevo que empieza a emerger.

En la economía, es mucho más claro lo que en veinticinco años se destruyó que lo que se construyó. El sector que mejor funcionó fue el exportador de productos primarios --aunque desde 1991 sus beneficios estuvieron acotados por la sobrevaluación del peso-- pero sus efectos sobre el resto de la economía fueron reducidos, sobre todo en materia de empleo. La convertibilidad y la sobrevaluación del peso hicieron difíciles las exportaciones industriales, aunque el Mercosur --una opción política alentada por todos los gobiernos-- constituyó una importante compensación. La reducción arancelaria y la supresión de subsidios liquidaron la industria ineficiente pero afectaron también al segmento de las que, aprovechando la facilidad crediticia, se modernizaron y reequiparon. Unas y otras contribuyeron a la pérdida de empleos --por desaparición o por sustitución tecnológica--, al igual que las empresas del estado, que al transferirse a manos privadas eliminaron muchísimo personal excedente. Varios grupos empresarios, antiguos contratistas del estado, ingresaron en las empresas privatizadas, junto con operadores y grupos financieros internacionales; no está claro cuánto hubo allí de manejo capitalista eficiente, cuánto de

apropiación de activos baratos y cuánto de nuevos negocios monopólicos.

En suma, se trata de un balance complejo, con algunos pocos ganadores y muchos perdedores. Hay una pregunta fundamental, de respuesta oscura: ¿qué lugar puede ocupar la Argentina en una economía mundial integrada? ¿Qué puede hacer el país mejor o más barato que otros? Por otra parte, es difícil hoy saber qué capacidad tiene el reducido sector modernizado para influir en el conjunto, restablecer el dinamismo de la economía capitalista y eliminar los comportamientos prebendarios.

En el corto plazo, lo que más pesa es el endeudamiento externo. Desde 1976, las fases de prosperidad y las de contracción coincidieron con el flujo y reflujo de fondos, en su mayoría especulativos, cuyo movimiento se favoreció por la eliminación de los controles. Como las mareas, subían y bajaban, y al retirarse arrastraban el ahorro interno acumulado. El resultado fue una impresionante deuda externa, que el estado es absolutamente incapaz de pagar, debiendo recurrir una y otra vez a los organismos internacionales de crédito, para que acuerden moratorias. A través de ellos, hay una permanente exigencia por parte de los acreedores de

ajuste de los gastos fiscales, siempre insuficiente. Se argumenta que el ajuste hará a la economía en su conjunto más eficiente, aunque en realidad el efecto buscado es, más sencillamente, aumentar la capacidad de pago del estado.

La modalidad del ajuste, los lugares donde se cortó y donde se mantuvo la afluencia de fondos fiscales, así como la política impositiva, sus rigideces y permisividad, han de ser, para quien sepa leerla, una verdadera radiografía del estado. Marcelo Cavarozzi ha hablado del fin del modelo *estado céntrico*. Actor principal de la fase de construcción y responsable de sus virtudes y de sus defectos, el estado perdió protagonismo, iniciativa y hasta unidad. El endeudamiento acotó su soberanía; el ajuste afectó su funcionamiento, sin reducir su colonización por los intereses corporativos. Buscando ganar confianza, se ató las manos con la Convertibilidad, una ley que vedaba la emisión monetaria por encima de las reservas en divisas y obligaba a cambiar un peso por un dólar. Buscando atenuar oposiciones y ganar aliados, los gobernantes concedieron mucho, a los grupos empresarios y a los dirigentes políticos, una corporación que se sumó a las restantes en la empresa de vivir del presupuesto nacional. Entre ellos, los dirigen-

tes de los estados provinciales, y sus representantes en el Senado de la Nación, se convirtieron en insaciables demandantes de prebendas, tanto mayores cuanto más débil era el centro del poder político.

Mientras la crisis económica y la desocupación disminuyó la masa de contribuyentes, el deterioro administrativo redujo la capacidad para recaudar. Con menos ingresos, el estado achicó un poco las prebendas y cortó drásticamente donde era más fácil: en la educación, la salud y la seguridad. Por otra parte, las secciones del estado dedicadas al control de los actores económicos privados se deterioraron, en parte por decisiones deliberadas, en el caso de las privatizaciones, y en parte por la corrupción. Vieja como el mundo, ésta creció espectacularmente en dos momentos: durante la última dictadura militar y en los diez años de gobierno de Menem, en los que el país estuvo dirigido por una verdadera banda depredadora; nada de lo que hicieron era absolutamente novedoso, pero como en el caso del *Proceso* militar y la violencia, una diferencia de cantidad se convierte en diferencia cualitativa.

En suma, en la Argentina de la decadencia —y por una serie de factores concurrentes— el

estado ha resultado cada vez más incapaz para financiarse, para actuar autónomamente, para imponer normas, para dirigir. Además, por obra del consenso dominante, transformado en *pensamiento único*, fue sistemáticamente descalificado y convertido en la *bête noire*, por razones legítimas e ilegítimas: las que tienen que ver con su carácter prebendario y también las relativas a sus funciones de control y de equidad. El estado se ha licuado y hoy aun los mejores gobernantes pueden hacer poco con semejante instrumento.

Desde hace mucho es difícil representarse a la sociedad argentina como antaño: democrática y móvil, donde la integración pasaba por el acceso al empleo. Del pleno empleo de los años 50 se ha pasado a la desocupación, muy alta: desde mediados de la década de 1990 se instaló en el 18% de la población económicamente activa, y al entrar en la de 2000 supera holgadamente el 20%, sin tener en cuenta los que solo tienen una ocupación temporal. El país está hoy muy lejos de la situación de pleno empleo de la década de 1950: la generación de los que hoy son jóvenes no han conocido qué es un empleo estable, y la mayoría de sus padres tampoco. Los sindicatos, expresión final de la Argentina de-

mocrática y a la vez corporativa, perdieron su relevancia y poco significan en el vasto mundo de la pobreza, donde los límites entre las *clases laboriosas*, los desocupados y las *clases peligrosas* no son fáciles de definir. ¿Qué es exactamente el saqueo a un supermercado?

En términos de identidad y organización, el lugar de los sindicatos es ocupado por las organizaciones de desocupados, los *piqueteros*. Quienes se manifiestan cortando caminos, son ciertamente la voz de los excluidos; a la vez, reclaman las migajas que aún tiene el estado para la asistencia social. Por otra parte las clases medias, emblema de la sociedad democrática y móvil, están en plena licuación; ellas aportan el grueso de los emigrantes; muchos se suman al mundo de la pobreza y, uno tras otro, van perdiendo los signos de su dignidad.

El segmento de los *ganadores* no es despreciable: son lo suficientemente numerosos como para animar un mundo de consumo y visibilidad. Pero deben encerrarse y protegerse. La sociedad móvil, continua, sin cortes estamentales, es remplazada por otra donde la polarización lleva a la segmentación. La ciudadanía social, el logro final de la Argentina de la expansión, ha sido arrasada: empleo estable, seguridad social,

jubilación son cosas excepcionales. La violencia social y la delincuencia llevan a los gobiernos a aplicar una *mano dura* que cuestiona seriamente la ciudadanía civil. ¿Qué ocurre con la ciudadanía política?

La paradójica democracia

Lo curioso es que, por primera vez en su historia, la sociedad argentina conoció desde 1983 un régimen político democrático liberal y republicano. No lo había conocido antes la sociedad democrática, hoy en vías de extinción, cuando estaba en su plenitud.

El *Proceso* militar fue decisivo para esta construcción de la democracia, casi *ex novo*. Quizá porque puso en evidencia, en su extremo, las lacras de las experiencias políticas anteriores, tanto dictatoriales como democráticas; no está de más insistir: los militares llevaron hasta sus últimos extremos prácticas y concepciones ya existentes y arraigadas en la cultura política argentina. Quizá también porque bastaba referirse al *Proceso* para unir voluntades, minimizar diferencias y construir en el discurso la figura clásica de la democracia: el pueblo derrotando a sus ene-

migos. Lo cierto es que, de las ruinas de la dictadura militar, abatida por la derrota de Malvinas, surgió una nueva convicción ciudadana, simétrica y opuesta al *Proceso*: la democracia sería tan poderosa como aquél, y tan capaz de lo bueno como el *Proceso* lo había sido de lo malo. El cielo y el infierno.

A la enorme confianza en las potencialidades de la fórmula política se sumó una convicción original acerca de las bondades del pluralismo. En la nueva política habría adversarios, pero no enemigos, y en la constitución del interés común se valoraría la diferencia y la confrontación. También hubo un nuevo aprecio de la ley y de las formas institucionales. Y en primer lugar, fundamentándolo todo, un consenso acerca del valor absoluto de los derechos humanos y un rechazo total a la violencia. En ese sentido, se trataba de una democracia sin precedentes en la Argentina. Casi no tenía tradiciones en que fundarse, ni dirigentes entrenados en esas prácticas, ni siquiera ciudadanos conocedores de sus rutinas. La nueva democracia se sostuvo en la ilusión acerca de sus potencialidades. Quizá fue una ilusión algo boba. Pero como señaló Juan Carlos Torre, es difícil imaginar que la democracia —al fin, un sistema

político profano, que debe fundarse en una convicción compartida— pudiera constituirse sin esta fe inicial, tal vez desmesurada.

El entusiasmo cívico se tradujo en prácticas políticas pertinentes: la afiliación masiva a los partidos políticos, su organización formal, la renovación de dirigentes y también de ideas. Ningún partido, ni siquiera el peronismo, pretendió ya ser la encarnación única del pueblo y de la nación. Por otra parte, las pasiones nacionalistas amenguaron, y hasta pudieron concluirse mediante un plebiscito las diferencias con Chile por cuestiones fronterizas.

La democracia se construyó con algunas debilidades originarias. Probablemente hubo entre los partidos más búsqueda de consenso que debate a fondo sobre alternativas. Se postergaron las cuestiones que significaban elegir un rumbo, y finalmente, cuando llegó la hora de las decisiones, éstas fueron tomadas fuera del marco deliberativo, por un poder Ejecutivo que avanzó sobre la norma republicana de la división de poderes. Los ciudadanos, por su parte, entendieron que había llegado la hora de ajustar cuentas con un estado otrora opresor, de modo que hubo más reclamos de derechos que asunción de deberes, empezando por el básico

del cumplimiento fiscal. Cualquier intento para exigir el riguroso cumplimiento de esas u otras obligaciones fue descalificado como un intolerable retorno a los tiempos del autoritarismo dictatorial.

En esos años iniciales —entre mediados de 1982 y mediados de 1985— los argentinos se tomaron un recreo para la utopía, como lo habían hecho, en otro contexto, al comenzar los años 70. Durante ese breve período pudo olvidarse no solo que la Argentina había cambiado de manera irrevocable luego de 1976; pudo creerse que su estado conservaba la eficiencia y los atributos soberanos que tenía en 1973; que las viejas corporaciones, protagonistas de los antiguos y duros conflictos, estaban domesticadas, atrapadas en la red de los partidos políticos, la representación y la civilidad: el conjunto de hombres de buena voluntad que construían el interés común. Pronto se descubrió que no era así, y en este ciclo anímico, a la ilusión siguió, por etapas, la desilusión.

El impulso progresista del primer gobierno democrático se detuvo pronto ante los sindicatos, que se resistieron a ser reformados, la Iglesia, que peleó duramente en el terreno del laicismo, y las Fuerzas Armadas, que toleraron el

juzgamiento de sus antiguos jefes, ya retirados --el Juicio a las Juntas fue el logro más importante de la civilidad-- pero resistieron con éxito el juzgamiento de oficiales en actividad. El gobierno de Alfonsín fracasó en sus intentos de revisar la deuda externa o de organizar un frente de países deudores. En cuanto a los grupos económicos concentrados, que eran por entonces las cumbres del nuevo ordenamiento de la economía, ni siquiera se insinuó la batalla. Hacia 1987 el impulso había encontrado su freno, y el primer gobierno democrático debía convocar a integrar el gabinete a los representantes de los grandes intereses corporativos: los sindicalistas más tradicionales y los empresarios más prominentes.

En realidad, se habían constatado dos límites: el del instrumento de acción, el estado, sin la capacidad de otrora para modificar el orden espontáneo de las cosas, y el de la civilidad, un actor político de enorme potencialidad para algunas acciones pero inútil para otras. Todo su respaldo no alcanzó para que, en la Semana Santa de 1987, el presidente encontrara un solo oficial del Ejército dispuesto a disparar contra sus camaradas rebelados. Allí se rompió por primera vez la ilusión ciudadana, afectando al

grupo más alerta y militante de la civilidad, el más comprometido con la construcción democrática. Quienes se negaban a aceptar que la realidad era tal cual era echaron culpas, naturalmente, al gobierno, que claudicaba ante los enemigos del pueblo. Así, sobre la desilusión ciudadana los peronistas encontraron la posibilidad de recuperar el terreno perdido en 1983 y vencieron en las elecciones de 1987 y 1989.

El fin de esta *primavera de los pueblos*, efímera como todas, dejó lugar a una relación menos apasionada de la sociedad y sus actores con sus gobernantes. En 1989, con la hiperinflación y el fin adelantado del gobierno de Alfonsín, hubo una segunda desilusión, que afectó al conjunto de los habitantes: la democracia no solo fracasaba en solucionar los problemas sino que los agravaba, y hasta perdía en la comparación con un gobierno militar de imagen ya más borrosa en el recuerdo colectivo. Al breve entusiasmo un poco mesiánico suscitado por Menem en 1989 siguió una mansa y pragmática aceptación de las reglas del juego, que el discurso oficial presentaba como inapelables. Si el fantasma del *Proceso* sustentó la democracia, el fantasma de la hiperinflación sostuvo largamente la Convertibilidad.

Por entonces el sistema democrático había arraigado, convertido en práctica normal que podía prescindir de las manifestaciones cotidianas de apoyo. Sus éxitos no son despreciables: elecciones regulares, al menos cada dos años, tres gobiernos de signo opuesto que se sucedieron entre 1983 y 1999, y algunos datos un poco más idiosincrásicos: el peronismo, el partido-pueblo, perdió una elección presidencial en 1983 y otra en 1999, esta vez como oficialismo. Instituciones que funcionaron, parlamentos que legislaron y jueces que juzgaron con alguna autonomía son logros significativos si se los compara con las experiencias militares anteriores, y no solo con ellas; aunque lógicamente las imperfecciones son abrumadoras en comparación con el deber ser o la letra constitucional. Pero cualquier democracia realmente existente es inferior al modelo: es deber del ciudadano denunciarlo, y del historiador comprenderlo.

¿En qué se apartó esta democracia realmente existente del modelo democrático-republicano contra el que eligió medirse? En primer lugar, sus dirigentes se plegaron a la realidad, admitieron que las instituciones sustentadas en el sufragio y fundadas en el interés común, que

gobernaban un estado desarmado, no podían modificar muchos de los rasgos ya definidos de la economía y la sociedad gobernada, ni afectar la actuación de los intereses corporativos instalados en el estado. Durante la década de 1990 el *pensamiento único* triunfó, sin términos medios. Esta aceptación de la realidad, visible ya en la segunda parte del gobierno de Alfonsín, fue plena en el de Menem, que hasta exageró un poco, para que le creyeran. Las instituciones democráticas, aunque algo hicieron, cumplieron mal su papel de balancear los poderes corporativos.

En segundo lugar, se alteró el equilibrio de poderes propio de la república. Los gobernantes timonearon en medio de las tormentas; en plena turbulencia, en nombre de la gobernabilidad, el Ejecutivo incursionó sobre los otros poderes alterando el equilibrio republicano. Ayudado por la crítica coyuntura con que empezó su gobierno, y fortalecido por la tradición peronista de la *conducción*, Menem avanzó mucho por este camino y su jefatura, casi de príncipe, se alejó bastante de la tradición republicana; pero en los momentos oportunos el Congreso, a diferencia de la Corte Suprema, supo recordar que había algunos límites.

En tercer lugar, la llamada clase política no lució. En lo suyo fue eficiente y profesional. Los partidos produjeron elecciones aceptables, con bajos costos en materia de enfrentamientos y polarizaciones. Los representantes fueron flexibles a la hora de realizar acuerdos. *Lobbystas* y operadores dieron forma a un subsuelo de la política, donde las eventuales rivalidades públicas en torno del interés común se convertían en privado en acuerdos provechosos para el interés particular; algo sin duda criticable, pero hasta un cierto punto, propio de cualquier sistema político. Todo se hizo muy profesionalmente: se compara con ventaja --no hay otra coyuntura similar-- con el período 1916-1930.

Pero a la vez, no fue exactamente una clase política como la pensó Gaetano Mosca: no tenía tradición de gobierno, ni ejemplos y valores con los que confrontarse. En materia de funcionarios, pocos tenían credenciales democráticas intachables. Algunos tenían en su historial las prácticas, relaciones personales y compromisos del *Proceso* con el que habían convivido. Otros quizá provenían de la experiencia de las organizaciones armadas, y en su conversión a la democracia había tanto pragmatismo como convicciones. Las instituciones en que debían

desempeñar su acción estaban ellas mismas corroídas en sus valores, en esa ética burocrática que —según suele decirse— sostiene los estados modernos: la Policía Bonaerense, la *maldita Policía*, es al respecto paradigmática.

En los primeros años de la democracia, la ciudadanía militante los vigiló de cerca, recordándoles que sus prácticas debían ajustarse a los valores proclamados. Pasado el impulso inicial, producida la primera desilusión, desatenta la sociedad, que los miraba de lejos, los políticos generaron su propio corporativismo, hecho de prebendas, privilegios y enjuagues, y por esa vía, quien más quien menos, se corrompieron. ¿Fueron los únicos? Al fin, hicieron lo mismo que cualquier grupo de argentinos: empresarios, sindicalistas, profesionales, docentes, desocupados, pues nuestro deporte nacional es organizarnos en corporación para mojar nuestro pan en la salsera del estado. Es cierto que con Menem se instaló una banda depredadora organizada, que practicó la corrupción de manera sistemática —el famoso *robo para la Corona*— con el agravante de hacer ostentación de la impunidad, de modo de convertir en valiosa y recomendable una conducta que hasta entonces solo era tolerada con resignación. Pero actuó

sobre un terreno ya preparado por décadas de practicar la corrupción del estado --cuando éste no era manejado democráticamente-- por los mismos que, en la hora, reclaman desde la *sociedad civil* pureza a la sociedad política. En suma, los políticos no fueron ni mejores ni peores que la sociedad de donde venían.

4. La crisis: final y apertura

El pozo de la crisis

La prosperidad del capitalismo mundial, volcada sobre la Argentina bajo la forma de un amplio financiamiento externo, disimuló por varios años esta decadencia e hizo concebir desmedidas expectativas acerca de los frutos de la Convertibilidad. Los problemas comenzaron a hacerse patentes hacia 1998 cuando, al estrecharse el flujo financiero externo, se inició un largo ciclo recesivo, que habría de durar al menos cinco años. En medio de la recesión hubo elecciones presidenciales y la Alianza, que reunió a los principales opositores al peronismo, ganó con cierta holgura. El programa de gobierno de la Alianza proponía una administración más racional y transparente, pero insistía en la continuidad de la Convertibilidad, que por entonces era para la gran mayoría —salvo algunas inoportunas Casandras— un valor aceptado, en parte porque se creía en sus méritos, en parte

porque nadie imaginaba cómo se podía salir de ella de una manera que no fuera catastrófica.

Hoy se discute si todo estaba jugado cuando asumió el gobierno Fernando de la Rúa (1999-2001), o si fue su notoria ineptitud, y su decisión de no emprender ningún camino riesgoso, lo que malogró las pocas oportunidades de evitar una resolución catastrófica. Pronto se advirtió que la red de intereses articulados en torno de los dirigentes políticos hacía abortar los débiles intentos de reforma estatal; mientras tanto, la lógica de la Convertibilidad, en tiempos de recesión, obligaba a profundizar las políticas del ajuste, buscando vanamente volver a atraer los erráticos capitales.

El cataclismo se produjo a fines de 2001. Primero, una fenomenal corrida bancaria, secuela de la retirada presurosa de las inversiones financieras, llevó a una congelación de todos los depósitos --el *corralito*-- y consecuentemente a una crisis económica vertiginosa, acentuada más tarde por la devaluación asimétrica, que dejó un problema entre deudores y acreedores insoluble en términos lógicos. Paralelamente las protestas sociales --algunas espontáneas, otras movidas por los aparatos partidarios peronistas-- y finalmente la crisis política desencade-

nada por los gobernadores peronistas, provocaron la renuncia del presidente, institucionalmente agravada por la renuncia, un año antes, del vicepresidente.

En cierto sentido, fue un verdadero golpe de estado, realizado en el marco de las instituciones. Le tocó a la Asamblea Legislativa salvar el débil hilo de la legitimidad, designando sucesivamente dos presidentes: el gobernador de San Luis Adolfo Rodríguez Saá y el senador por Buenos Aires Eduardo Duhalde. Con Duhalde —candidato presidencial derrotado en 1999—, comenzó a restablecerse un centro mínimo de autoridad política, que por varias semanas había quedado girando en el vacío, como una rueda loca.

Varios fueron los signos emergentes de la crisis. La falta de una moneda nacional y la proliferación de bonos provinciales de dudoso valor. El cuestionamiento de los contratos comerciales. La creciente inseguridad pública y el recrudecimiento de los actos criminales, quizá por la desesperación de los delincuentes, quizá por la corrupción de las fuerzas policiales, a menudo dedicadas a protegerlos y hasta a organizarlos. Y finalmente la dudosa existencia del orden jurídico, por la incapacidad estatal de hacer cumplir

la ley y por el descrédito de quienes estaban encargados de administrar justicia. La crisis siguió avanzando. Los problemas de las instituciones democráticas quedaron postergados por otros, que hacen a la propia viabilidad del estado.

La hiperinflación de 1989 terminó con las ilusiones de la potencia democrática; en un cierto sentido, se entró en una etapa de madurez política, pronto oscurecida por un nuevo velo: la ilusión de la Convertibilidad. El año 2002 acabó con ella y creó las condiciones para poder mirar de manera madura, a fondo y descarnadamente, los problemas argentinos. En muchos ámbitos así ocurrió.

Pero 2002 fue sobre todo el año de la crisis, de la ira y de los jacobinos. También, el del voluntarismo. La inestabilidad política, el *corralito*, la devaluación que siguió poco después, todo dejó como saldo una sociedad movilizada, furiosa y ciega, que arremetía sin mirar demasiado contra quién. En medio de la crisis muchos se sintieron compelidos a actuar, a manifestarse cada día. Esta urgencia militante fue diferente de otras anteriores: no se sabía exactamente dónde estaba el bien y dónde el mal. Los políticos ocuparon el lugar del mal, pero de manera un poco vicaria: la llamada *crisis de representación*

--resumida en la consigna *que se vayan todos*-- era a su modo una manera de tapar el cielo con un harnero. Entre los muchos que gritaban a ciegas, reclamando por lo suyo, hubo quienes imaginaron que podría terminar de derribarse todo el edificio institucional podrido. Así, se reclamó una reorganización total, una suerte de asamblea constituyente en la que, más allá de la cuestionada mediación política, pudieran expresarse las fuerzas puras de la sociedad. Se dibujaba una nueva ilusión: la *regeneración*.

Pero sorpresivamente la historia siguió otro rumbo. En lo más profundo de la crisis, nadie había propuesto caminos diferentes de los democráticos, pues hasta los más radicales aspiraban en realidad a alguna forma de democracia directa. En la segunda mitad de 2002, mientras en lo visible la economía mostraba una cierta tranquilidad --contra los pronósticos, el *default* no había acarreado la catástrofe total--, el llamado a elecciones presidenciales reflató a los políticos, a veces a través de los partidos tradicionales y a veces en agrupaciones nuevas de nombre, pero bastante parecidas a las viejas.

La campaña electoral trajo otra sorpresa: la poderosa irrupción del ex presidente Menem, que conservaba fuerte arraigo en el peronismo,

servió para que un amplio arco político, hasta entonces desarticulado, encontrara en él un referente negativo contra quien unirse. Aunque su retirada final impidió que la historia se consumara de manera plena, Menem ayudó a dar forma a la clásica figura democrática en la que el pueblo se une para derrotar al enemigo del pueblo. No faltó otro elemento tradicional en esta figura democrática: la cruzada popular era encabezada por el jefe del estado, el presidente Duhalde; la Providencia, o la razón histórica, se vale de curiosos instrumentos para realizar sus fines. Ungido en mayo de 2003 con pocos votos reales, pero muchos potenciales, el presidente Kirchner —al fin de cuentas, un miembro de la clase política— logró extraer de ese mandato constitucional una fuerza política impensable para quienes, apenas seis meses antes, pronosticaban que las elecciones simplemente acelerarían la disgregación del régimen político y del estado mismo.

Perspectivas interesantes

No sabemos si este sorpresivo giro de la crisis es una gran curva en el curso del río, o apenas un meandro. Como ocurre cuando se sube

una montaña, y el mismo paisaje se nos aparece con perspectivas novedosas, esta nueva situación nos permite mirar el panorama de la crisis desde otro ángulo, muy interesante. Examinemos brevemente qué puede verse de nuevo en la sociedad y en la democracia.

La crisis, que terminó de pulverizar la antigua sociedad integrada, móvil y democrática, creó actores nuevos. Tres figuras sociales pueden sintetizar la nueva realidad: los *caceroleros*, los *piqueteros* y los *cartoneros*. Los primeros, en general provenientes de sectores de clase media, que reclaman ante los bancos o las sedes gubernamentales por sus ahorros perdidos o por la corrupción de los políticos, expresan la protesta rabiosa e irreflexiva de los defraudados. Los segundos, desocupados que se manifiestan cortando caminos, son la voz, terrible y justa a la vez, de los excluidos. Los últimos, que por las noches revuelven la basura para juntar papeles y cartones que valen su peso en dólares, semejan la invasión de los ejércitos de las tinieblas sobre la *ciudad propia*, como decía hacia 1870, en circunstancias similares, el intendente de Santiago de Chile Benjamín Vicuña Mackenna.

Es fácil ver en ellos el signo de la disgregación y hasta de la explosión del orden social, y

el inicio de un camino sin futuro. Y sin embargo, no son ni anárquicos ni destructivos: los *caceroleros* amainaron pronto, y los más militantes se convierten en grupos de gestión de problemas barriales. Los *piqueteros* llevan hasta sus últimas consecuencias la técnica, largamente conocida, de organizarse para reclamarle beneficios al estado; presionan lo justo y programan sus acciones, de modo que evitar los piquetes del día se integra a las rutinas de los demás habitantes. Los *cartoneros* son en realidad un engranaje de una empresa de vastos alcances, económicos y políticos, de modo que usualmente se concentran en lo suyo, eficiente y pacíficamente. Algunos de ellos tendrán una existencia más perdurable que otros. Pero todos nos muestran nuevos tipos de organización, sociabilidad y reclamo sectorial; probablemente así fueron vistos, en su momento, los primeros pasos de formas de organización social sectorial que hoy nos parecen normales y legítimas. En todo caso, estas nuevas organizaciones nos recuerdan que los caminos de salida de las crisis, nunca lineales, suelen sorprender a quienes las viven.

Algo parecido ocurre con la democracia, pues con la crisis le llegó la hora de la verdad.

Desde 1983 coexistieron, para asombro de los analistas, una democracia política que funcionaba y una sociedad que ya no era democrática, pero que, a diferencia de otras, lo había sido y todavía podía recordarlo. Durante unos años muchos especularon acerca de cuánto podía durar ese divorcio: un sistema político democrático en una sociedad que se vaciaba de ciudadanía; un sistema fundado en la igualdad política --un hombre, un voto-- pero que era incapaz de modificar la tendencia de la sociedad hacia la desigualdad creciente.

Es posible que un sistema de partidos eficiente y aceptado pueda funcionar sin la participación cotidiana de la ciudadanía. Pero es más difícil imaginar que se sostenga si no hay entre los representados algo del fuego sagrado de la fe; sobre todo si esta carencia no es compensada con alguna valoración de la eficacia gubernamental. La ilusión democrática inicial se trocó en los años 90 en indiferencia; el 19 de diciembre de 2001 se produjo el pasaje del desapego a la furia, y efectivamente todo el andamiaje se conmovió. Pero no se derrumbó. No aparecieron espadaones ni mesías. Si la representación política está en crisis, al menos subsiste la idea de que cualquier solución deberá trans-

currir en el marco de un orden institucional: débil, violentado, pero que de alguna manera se mantiene.

Las posibilidades de supervivencia y consolidación de la democracia dependen hoy principalmente de la demostración de alguna eficiencia por parte del estado, gobernado democráticamente. En suma, el núcleo saliente, inmediato e impostergable de la crisis reside en el estado y en su escasa capacidad para convertirse en ejecutor de las políticas diseñadas por los gobernantes, para ser algo distinto que la mera resultante de un cúmulo de fuerzas instaladas en su interior. Toda discusión acerca de proyectos y modelos es hoy banal: nadie está, por el momento, en situación de encarar la realización de ninguno de ellos.

A mediados de 2002 parecía que aún había una cuestión previa: el restablecimiento de un centro mínimo de autoridad institucional y política. Por entonces, la imagen del vacío de poder parecía pertinente. Promediando 2003, esto parece logrado, porque las elecciones han conferido una autoridad constitucional importante al nuevo presidente y también —o quizás antes— porque empezaron a resolver la cuestión de la jefatura en el peronismo.

La segunda tarea, descomunal como los trabajos de Hércules, es empezar a despejar las oficinas del estado, a desalojar a quienes las han colonizado. No se trata solamente de eliminar a algunos personajes conspicuos; se trata de destrabar las redes de relaciones e intereses que durante veinte años constituyeron los bajos fondos de la política democrática y que eran la continuación, a veces sin mayores cambios, de otras ya anudadas desde mucho antes, incluso durante la Argentina vital. Muchas de las acciones iniciales del nuevo gobierno constitucional van en ese sentido, atacando sobre todo aquellos reductos ocupados por personas o grupos estrechamente vinculados con Menem. No es extraño: el presidente se juega allí su supervivencia. Es solo el comienzo, el primer round, y podría decirse que se avecina un combate interesante.

En paralelo, el nuevo gobierno deberá encarar una negociación más civilizada pero igualmente dura: obtener algún margen de manobra mayor de parte de los tenedores de la deuda externa y sus representantes. Si al cabo de cuatro años esta gestión presidencial logra recuperar para el estado un cierto margen de autonomía, y a la vez iniciar la reconstrucción

de sus cuadros burocráticos y restablecer una base mínima de ética institucional, es posible --no me atrevo a decir que probable-- que entonces pueda plantearse una discusión acerca del rumbo del país, acerca de los modelos o proyectos, o simplemente acerca de cómo transformar el ingreso catastrófico de la Argentina en el mundo del capitalismo mundial en una integración razonada y controlada. El estado será muy distinto del que supo tener la Argentina potente; quizá no pueda tomar decisiones grandes, dramáticas y profundas; pero al menos deberá poder gestionar razonablemente bien una sociedad que quiere encontrar una adecuada combinación de capitalismo, democracia y bienestar.

El estado --cualquiera que sean sus características-- es con seguridad una condición necesaria, pero no suficiente. En un futuro muy próximo, antes de que estos cambios puedan cuajar y modificar el cuadro de la situación, deberá resolverse la cuestión del peronismo y su jefatura. Parece claro hoy que, en un proceso de crisis que aún no ha sido superado, solo los peronistas pueden gobernar este país, no tanto por sus méritos intrínsecos como por su segura capacidad para bloquear la acción de cualquier otra

fuerza política. La Argentina no ha conocido nada más potencialmente disolvente que un peronismo opositor.

Queda por resolver quién manda en el peronismo, quién es el jefe. El peronismo siempre fue un movimiento de líder, donde se hace culto tanto de la verticalidad como de la conducción: *Pérez conducción* es la consigna que primero vocea quien funda una unidad básica e inicia su *cursus honorum* en el peronismo. Muerto Perón, el movimiento anduvo a los tumbos hasta que Menem construyó, de manera técnicamente impecable, su posición de conductor. Es evidente que ella está vacante hoy. ¿Quién la ocupará? El jefe del estado es, naturalmente, el principal candidato. Pero hoy el peronismo semeja a la etapa de la fragmentación feudal que en Europa precedió al crecimiento monárquico; hay jugadores fuertes, que controlan fragmentos importantes de la estructura territorial, y que se han acostumbrado a la autonomía y a sus ventajas: particularmente, poder presionar y exprimir al gobierno central.

Puede pensarse que el peronismo ingresa en una nueva etapa, más horizontal, sin líder, sin monarca. Quién puede saberlo. Pero si Kirchner aspira a fundar un nuevo liderazgo de-

berá someter, uno a uno, a los grandes magnates, combinando el premio y el castigo, el palo y la zanahoria. Así lo hizo Menem en su ocasión. Su base propia es pequeña, pero los resortes que maneja el gobierno nacional son importantes. En cualquier caso, la gran batalla se dará en la provincia de Buenos Aires: así ocurrió con Roca en 1880, o con Yrigoyen, cuando desalojó a los conservadores en 1917, o con Perón, cuando eliminó a Mercante en 1950. No es fácil saber cómo terminará esta historia que, otra vez, parece interesante.

Toda crisis es interesante, sobre todo cuando una leve mejoría permite avizorar mejor el panorama. Porque el fondo de la crisis --allí estuvimos, quiero creer, en 2002-- es el peor lugar para entender cuál es su dinámica y cuáles son sus salidas. San Agustín, obispo de Hipona, vivió a principios del siglo V, soportó la invasión de los vándalos al África del Norte y contempló el derrumbe del Imperio Romano. En sus ojos, la civilización entera desaparecía con él: *el mundo es un infierno en pequeña escala*, escribió en 429. Y sin embargo, en ese mismo momento, en las ruinas del mundo romano, se estaba produciendo el nacimiento de una cultura cristiana nueva y esplendorosa, de la que el mismo Agustín

sería posteriormente reconocido como uno de los Padres. Es posible, pues, que delante de nuestros ojos estén apareciendo formas de sociabilidad y de gestión de la política novedosas y creativas. Una medida prudente es mirarlas con seriedad e interés, y también con algo, no mucho, de esperanza.

Julio de 2003

Bibliografía

Altamirano, Carlos, *Bajo el signo de las masas (1943-1973)*, Buenos Aires, Ariel, 2001.

——, *Peronismo y cultura de izquierda*. Buenos Aires, Temas, 2001.

Belmartino, Susana, et. al., *Corporación médica y poder en salud. Argentina, 1920-1945*, Rosario, Organización Panamericana de la Salud, 1988.

Bertoni, Lilia Ana, *Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad argentina a fines del siglo XIX*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.

Botana, Natalio, *El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916*, 2ª ed., Buenos Aires, Sudamericana, 1994.

Brennan, James, *El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 1955-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1996.

Cavarozzi, Marcelo, *Autoritarismo y democracia (1955-1996). La transición del Estado al mer-*

cado en la Argentina, Buenos Aires, Ariel, 1997.

De Privitellio, Luciano, *Vecinos y ciudadanos. Política y sociedad en la Buenos Aires de entreguerras*, Buenos Aires, Siglo veintiuno editores Argentina, 2003.

Devoto, Fernando, *Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna*, Buenos Aires, Siglo veintiuno de Argentina Editores, 2002.

Di Stefano, Roberto; Sabato, Hilda; Romero, Luis Alberto y Moreno, José Luis, *De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en la Argentina, 1776-1990*, Buenos Aires, Gadis, 2002.

De Riz, Liliana, *La política en suspenso, 1966-1976*, Buenos Aires, Paidós, 2000.

Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas, *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas*, Buenos Aires, Ariel, 1998.

Halperin Donghi, Tulio, *La larga agonía de la Argentina peronista*, Buenos Aires, Ariel, 1994.

—, *Vida y muerte de la República verdadera (1910-1930)*, Buenos Aires, Ariel, 2000.

Gillespie, Richard, *Soldados de Perón. Los Montoneros*, Buenos Aires, Grijalbo, 1987.

- James, Daniel, *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
- Katz, Jorge y Kosakoff, Bernardo, *El proceso de industrialización en la Argentina: evolución, retroceso y perspectivas*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1989.
- Palermo, Vicente y Novaro, Marcos, *Política y poder en el gobierno de Menem*, Buenos Aires, Norma, 1996.
- Quiroga, Hugo, *El tiempo del "Proceso". Conflictos y coincidencias entre políticos y militares, 1976-1983*, Rosario, Fundación Ross, 1994.
- Romero, José Luis, *Las ideas políticas en Argentina*, 5ª ed., Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1975.
- , *Latinoamérica: las ciudades y las ideas*, 2ª ed. Buenos Aires, Siglo veintiuno editores Argentina, 2001.
- Romero, Luis Alberto, *Breve historia contemporánea de la Argentina*, 2ª ed., Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.
- Rouquié, Alain, *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, Buenos Aires, Emecé, 1981- 1982.
- Schvarzer, Jorge, *La política económica de Martínez de Hoz*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.

- Sigal, Silvia y Verón, Eliseo, *Perón o muerte. Las estrategias discursivas del fenómeno peronista*, Buenos Aires, Legasa, 1986.
- Terán, Oscar, *Nuestros años sesentas*, Buenos Aires, Puntosur, 1991.
- Torre, Juan Carlos, *La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
- Torre, Juan Carlos, *Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976*, Buenos Aires, CEAL, 1983.
- Vezzetti, Hugo, *Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo veintiuno editores Argentina, 2002.
- Zanatta, Loris, *Del estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 1996.

